

Riesgo por injerencia e intensidad de acciones de Grupos Armados Ilegales para las elecciones nacionales de 2026



Kyle Johnson

Ángela María Gómez Vega

Fundación Conflict Responses - CORE

Amira del Rosario Forero Romero

Ana María Montaña Cardozo

Asistentes de investigación - MOE

1. Introducción

El escenario de las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026 plantea desafíos significativos para la democracia colombiana, en particular por los riesgos asociados a la injerencia y acciones violentas de los Grupos Armados Ilegales (GAI) en distintas regiones del país. En el presente capítulo se analiza de qué manera estos actores pueden afectar el desarrollo del proceso electoral.

Este análisis se inscribe en un contexto de reconfiguración y recrudecimiento de la violencia en varias regiones de Colombia. En los últimos tres años, se ha observado un aumento de las acciones armadas por parte de grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las distintas facciones de las disidencias de las FARC y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en medio de disputas territoriales, fragmentaciones internas y confrontaciones con la fuerza pública. Dichas dinámicas han impactado a la población civil, generando escenarios de alta inestabilidad en zonas como el Catatumbo, el norte y sur del Cauca y el sur de Bolívar.

La violencia armada tiene consecuencias directas sobre el desarrollo de los procesos electorales al limitar la participación

democrática de candidatos, electores, funcionarios públicos y observadores. En este contexto, la intensificación de enfrentamientos, el uso de explosivos, los desplazamientos forzados, confinamientos y otras afectaciones a la seguridad restringen la libertad de circulación, la realización de actividades proselitistas y el ejercicio del voto. Aunque algunos grupos armados, como Coordinadora Nacional-Ejército Bolivariano (CN-EB) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), han anunciado su intención de respetar el proceso electoral, otros, como el Estado Mayor Central (EMC), han advertido un incremento de su accionar armado durante el periodo electoral, lo que constituye una amenaza directa para el normal desarrollo de las elecciones en los territorios donde tienen injerencia.

Adicionalmente, los grupos armados inciden en la dinámica política a través de prácticas de gobernanza armada, más allá de la confrontación militar. El control territorial y social, las restricciones a la movilidad, los toques de queda y los paros armados, como el iniciado por el ELN a nivel nacional, en diciembre de 2025, afectan de manera estructural la competencia electoral. A esto se suma la coacción a comunidades, líderes sociales y candidaturas mediante la violencia y la imposición o prohibición de opciones políticas, así como la captura del poder local a través de alianzas con actores políticos,

la financiación ilegal de campañas o el control social del voto. Estas prácticas distorsionan la competencia, debilitan la representatividad democrática y comprometen la gobernabilidad y la legitimidad de las autoridades electas.

En este capítulo se identifican los municipios en los que existe riesgo de injerencia por parte de grupos armados como el ELN, las “disidencias” de las FARC: Estado Mayor Central (EMC), Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), Segunda Marquetalia, Coordinadora Nacional-Ejército Bolivariano (CN-EB) y Frente 57; los Comuneros del Sur; el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC); y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Posteriormente, se analiza la intensidad de sus acciones armadas y de gobernanza armada, con el fin de evaluar los principales riesgos que estos actores representan para el desarrollo de las elecciones nacionales de 2026. Finalmente, se presentan recomendaciones para las entidades encargadas de garantizar el proceso democrático.

2. Metodología

Para este análisis, se define injerencia como la capacidad de un grupo armado para influir en la realidad local, o ejercer poder de manera sostenida, de forma directa e indirecta. La injerencia puede ser económica, política o militar. Para la injerencia económica

se busca establecer si una unidad afecta a la economía local, por ejemplo, a través de extorsiones o por medio de la regulación o participación de economías legales e ilegales. En la injerencia política, se busca la evidencia de gobernanza por parte de los grupos armados ilegales y su influencia en las elecciones. Finalmente, en la injerencia militar, se revisan las acciones armadas (CORE, 2024).

El riesgo electoral derivado de la injerencia de los grupos armados se mide a través de las acciones armadas, políticas y económicas, que han realizado en el 2025. La injerencia de tipo armada se refiere a hechos como combates, hostigamientos, enfrentamientos con otros grupos ilegales y uso de explosivos; de otro lado, las afectaciones a la población civil, refieren a homicidios, amenazas, desplazamientos y confinamientos, entre otras. La injerencia económica puede ser la extorsión o control de las economías ilícitas. Por último, la injerencia política se identifica a través de acciones propias de la gobernanza armada, como control social, imposición de normas, los castigos por romperlas y la resolución de conflictos.

El análisis del riesgo de injerencia de los grupos armados se elaboró con base en información recabada directamente

por la Fundación Conflict Responses (CORE) en su trabajo de campo, complementada con la información suministrada por la MOE, con fuentes de inteligencia militar y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo ¹. Esta información permite identificar dinámicas de control territorial, gobernanza armada y capacidad de coerción sobre la población. Por esta razón, el número de municipios clasificados con riesgo de injerencia puede diferir del número de municipios identificados con riesgo por intensidad de las acciones armadas dado que, para esta segunda categoría, se utilizó la información suministrada por la MOE, la cual se alimenta de datos del Monitor Humanitario de OCHA, además de fuentes abiertas como revisión sistemática de prensa. En consecuencia, mientras el riesgo de injerencia se basa en la capacidad de influencia de los grupos armados, el riesgo por intensidad refleja únicamente la ocurrencia de acciones armadas concretas.

En cuanto al riesgo por intensidad de las acciones violentas, se tomaron los registros que ha hecho la MOE del número de eventos de conflicto registrados por parte del grupo armado ilegal en cada municipio hasta noviembre de 2025. Cada evento se ponderó y se calculó un índice de violencia de la

¹ En algunos apartes del texto, se especifica en las notas al pie de página cuando la información y los datos fueron obtenidos a partir de dicho trabajo de campo, ya sea mediante entrevistas, revisión de documentos, entre otros.

siguiente manera: 0.6 por los hechos de desplazamiento, confinamiento, reclutamientos forzados y masacres; 0.3 por los hechos relacionados con acciones bélicas, ataques a bienes civiles, ataques a objetos ilícitos de guerra, homicidios, atentados, secuestros, minas antipersonales, violencia sexual y hechos de gobernanza criminal; y 0.1 por hechos relacionados a panfletos, vallas y grafitis. De acuerdo con la ponderación y normalización de estas categorías se clasificaron los municipios en riesgo extremo, alto y medio.

En las distintas regiones no se presentan los mismos riesgos pues, en zonas donde un grupo armado es el actor hegemónico, el riesgo está en que el grupo ejerza presión sobre la población civil y tenga la capacidad de restringir la participación de partidos, movimientos o candidatos. Mientras que, en regiones de disputa entre grupos armados, el riesgo está relacionado al accionar violento causado por los enfrentamientos. Por este motivo, es relevante identificar cómo la gobernanza armada, que ejercen los grupos armados, puede incidir en el ejercicio de los derechos de participación democrática.

Este análisis toma como fuente de información la base de datos de monitoreo de violencia de la Misión de Observación Electoral, que se basa en fuentes secundarias. Así como, fuentes secundarias como informes de instituciones del Esta-

do, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Por último, se toma la información obtenida por la MOE en el desarrollo de entrevistas y grupos focales en 10 departamentos. Así como el trabajo de campo realizado por la Fundación CORE en 2025.

3. Riesgo por injerencia de los grupos armados

El año 2025, trajo un panorama desafiante frente al accionar de los grupos armados ilegales, con un aumento en varios indicadores de seguridad, como el incremento de los desplazamientos forzados y confinamientos. Así mismo, el aumento de los combates entre la fuerza pública y los grupos armados, los hostigamientos de los grupos armados a la fuerza pública y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Sin embargo, la injerencia de estos grupos no se limita a las acciones armadas, también abarca formas de control político, reclutamiento y labores de inteligencia a través de milicias, así como mecanismos de control económico, entre ellos la extorsión y el aprovechamiento de economías ilegales. Por lo tanto, puede haber diferencias entre el número de municipios alertados con injerencia y los alertados por intensidad de acciones armadas. A continuación, se presentan los riesgos derivados del accionar para cada uno de los grupos armados

ilegales en los municipios analizados.

3.1. Riesgo por injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Comuneros del Sur

Los departamentos con mayor riesgo

por injerencia del ELN son Arauca, Vichada, Cesar, Chocó, Norte de Santander, Casanare y Bolívar, los cuales tienen más del 50% de sus municipios con injerencia de este grupo armado (Tabla 1).

Tabla 1. Municipios con riesgo por injerencia de ELN y los Comuneros del Sur

Departamento	Municipios Con Riesgo De Injerencia ELN	Número De Municipios Por Departamento	Porcentaje
Antioquia	23	125	18,4
Arauca	7	7	100,0
Atlántico	1	23	4,3
Bogotá	1	1	100,0
Bolívar	23	46	50,0
Boyacá	24	123	19,5
Caldas	1	27	3,7
Casanare	10	19	52,6
Cauca	22	42	52,4
Cesar	21	25	84,0
Chocó	20	31	64,5
Guzania	4	9	44,4
Guajira	7	15	46,7
N. De Santander	24	40	60,0
Nariño	20	64	31,3
Risaralda	2	14	14,3
Santander	29	87	33,3
Valle	10	42	23,8
Vichada	4	4	100,0
Total	253	1123	22,53

Elaboración CORE

El ELN tiene injerencia en el macizo caucano, Magdalena Medio, Nordeste antioqueño, las subregiones de San Juan, Pacífico y Atrato en el Chocó, Catatumbo en Norte de Santander, y una parte de los Llanos Orientales, incluyendo Arauca (principalmente), Vichada y Guainía. Para el 2025 tiene un poco más de 6200 miembros, y 253 municipios se encuentran en riesgo por su injerencia. A partir de la suspensión del cese al fuego en agosto de 2024 y las negociaciones en enero de 2025 por parte del Gobierno Nacional, el ELN ha incrementado sus ataques a la fuerza pública. Desde enero de 2025, en el Catatumbo rompió la alianza que tenía con el Frente 33 del EMBF, lo que ha causado graves impactos humanitarios.

Desde mayo de 2024, los Comuneros del Sur anunciaron que se separaban del ELN, para darle continuidad a las negociaciones de paz con el gobierno. Este grupo tiene injerencia en municipios de Nariño como Los Andes, Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Samaniego, Santacruz de Guachavés y Túquerres. Durante el 2025 han mantenido las negociaciones con el gobier-

no y hasta el momento han llegado a firmar acuerdos relacionados a la destrucción de armamento, tránsito a la vida civil de sus miembros, sustitución de cultivos de uso ilícito y búsqueda de personas desaparecidas. Este grupo mantiene una alianza con la CN-EB y un grupo denominado “Autodefensas Unidas de Nariño”, para enfrentarse al Frente Franco Benavides del EMC, aunque ahora mantienen un pacto de no agresión. Las AUN se conocen por primera vez en 2023 y las acusan de haber sido creadas como una extensión de Comuneros del Sur, como una estrategia para continuar en armas (CORE, 2025).

3.2. Riesgo por injerencia “EMC” y “EMBF”

Los departamentos con más municipios alertados por injerencia del EMC son Amazonas, Arauca, Cauca, Casanare, Guaviare, Huila, Nariño y Valle del Cauca, y en menor medida Caquetá y Putumayo. El EMBF se concentra principalmente en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Huila, Meta, Norte de Santander y Tolima, y en menor medida Guaviare y Putumayo (Tabla 2).

Tabla 2. Municipios con riesgo por inferencia de EMC y EMBF

Departamento	Municipios con riesgo EMBF	Municipios con riesgo EMC	Número De Municipios Por Departamento	Porcentaje EMC	Porcentaje EMBF
Amazonas	1	8	11	9,1	72,7
Antioquia	28	1	125	22,4	0,8
Arauca	0	4	7	0,0	57,1
Bolívar	8	0	46	17,4	0,0
Caquetá	11	5	16	68,8	31,3
Casanare	3	6	19	15,8	31,6
Cauca	0	38	42	0,0	90,5
Cesar	2	0	25	8,0	0,0
Guanía	0	2	9	0,0	22,2
Guaviare	2	4	4	50,0	100
Huila	21	20	37	56,8	54,1
Meta	13	5	29	44,8	17,2
N. De Santander	14	0	40	35,0	0,0
Nariño	0	15	64	0,0	23,4
Putumayo	2	4	13	15,4	30,8
Tolima	8	6	47	17,0	12,8
Valle	0	15	42	0,0	35,7
Vaupés	0	1	6	0,0	16,7
Vichada	0	2	4	0,0	50,0
Total	113	135	1123	10,1	12,0

Elaboración CORE

Hasta abril de 2024 el “EMC” estaba bajo el mando de ‘Mordisco’, pero se dividió por cuenta de tensiones internas y la suspensión del cese al fuego en

marzo de ese año. Cifras del Ministerio de Defensa indican que el “EMC” tiene unos 3.919 miembros y el EMBF tiene 2.802 miembros. El EMC tiene

135 municipios en riesgo de injerencia y el EMBF 113 municipios.

Con la división interna, los frentes del “EMC” en el Cauca, Nariño, Valle del Cauca, parte del Huila, y parte del Guaviare, Caquetá y Amazonas, quedaron bajo el mando de ‘Mordisco’ y los frentes de Magdalena Medio, sur del Bolívar, Catatumbo, parte del Guaviare, Caquetá, Meta, Huila y Tolima quedaron bajo el mando de ‘Calarcá’. El EMBF mantiene negociaciones de paz con el gobierno, aunque sin ceses al fuego o suspensión de operaciones militares desde mayo de 2025.

3.3. Riesgo por injerencia “CN-EB”, Segunda Marquetalia y Frente 57

El grupo “disidente” que más número de municipios tiene injerencia es la CN-EB con dos grandes “alas”: la Coordinadora Guerrillera del Pacífico en Nariño y Cauca, y Comandos de la Frontera en Caquetá, Putumayo y Amazonas. Así mismo, se encuentra la Segunda Marquetalia con injerencia en Guainía, Vichada, Caquetá y Meta, principalmente. Por último, se incluye el Frente 57, que no está bajo la coordinación de ninguna otra disidencia, con injerencia en el sur del Valle del Cauca, norte del Cauca y con intentos de expansión hacia el Tolima (Tabla 3).

Tabla 3. *Municipios con riesgo por injerencia de Segunda Marquetalia, CN-EB, Frente 57*

Departamento	CN-EB	SM	Frente 57	Número De Municipios Por Departamento	Porcentaje CN-EB	Porcentaje SM	Porcentaje Frente 57
Amazonas	7			11	63,6	0,0	0,0
Antioquia		1		125	0,0	0,8	0,0
Caquetá	9	6		16	56,3	37,5	0,0
Cauca	3		6	42	7,1	0,0	14,3
Guainía		6		9	0,0	66,7	0,0
Huila	2	3		37	5,4	8,1	0,0
Cauca		5		29	0,0	17,2	0,0
Cesar	13			64	20,3	0,0	0,0

Departamento	CN-EB	SM	Frente 57	Número De Municipios Por Departamento	Porcentaje CN-EB	Porcentaje SM	Porcentaje Frente 57
Guainía	7			13	53,8	0,0	0,0
Meta		5		29	0,0	17,2	0,0
Nariño	13			64	20,3	0,0	0,0
Putumayo	7			13	53,8	0,0	0,0
Santander		3		87	0,0	3,4	0,0
Tolima			1	47	0,0	0,0	2,1
Valle	1		7	42	2,4	0,0	16,7
Vichada		2		4	0,0	50,0	0,0
Total	42	26	14	1123	3,7	2,3	1,2

Elaboración CORE

Hasta noviembre de 2024, la Segunda Marquetalia se mantuvo bajo esta sombrilla. Sin embargo, el grupo se “dividió” entre los que estaban bajo el mando de ‘Iván Márquez’ y la CN-EB, que se mantiene en negociaciones de paz con el gobierno, con ‘Walter Mendoza’ como jefe militar y de diálogo en la mesa. La Segunda Marquetalia tiene 532 miembros, aproximadamente, y CN-EB se calcula que tiene unos 1962 miembros. La SM tiene injerencia en 26 municipios y la CN-EB en 42.

La Segunda Marquetalia mantiene injerencia en algunos municipios de Caquetá, Guainía, Huila, Meta, Santan-

der, Vichada y en zona fronteriza con Venezuela, aunque se ha debilitado su injerencia en Colombia. En agosto fue asesinado ‘Zarco Aldinéver’, quien era el segundo al mando. Según un comunicado, fue emboscado por el ELN en territorio venezolano, fronterizo con Arauca (Segunda Marquetalia, 2025).

La CN-EB, que tiene injerencia principalmente en el Pacífico nariñense, Putumayo, el sur del Cauca, Amazonas y parte de Caquetá, mantiene negociaciones de paz con el gobierno, y ha logrado establecer algunos acuerdos sobre la sustitución de cultivos ilícitos y dos Zonas de Ubicación Temporal.

La CN-EB incluye a Comandos de la Frontera², que desde 2021 se había integrado a la Segunda Marquetalia, y tiene injerencia principalmente en municipios de Putumayo, Caquetá y Amazonas. Este grupo armado se compone por miembros del que fuera el Frente 48 de las antiguas FARC y miembros de “La Constru”, un grupo de crimen organizado vinculado con el paramilitarismo y el narcotráfico, e incluso ex integrantes de la Fuerza Pública.

En el Sur del Valle y Norte del Cauca, a finales de 2023 e inicios de 2024, surgió una disidencia de las disidencias de las extintas FARC, el Frente 57 “Yair Bermúdez”, liderada por ‘Oscar’, quien era comandante del Frente Uriás Rondón del EMC en el Pacífico nariñense. El Frente 57 ha reclutado miembros que eran del Frente Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos del EMC, su enemigo en este momento. Desde su creación, este frente ha desatado

una ola de homicidios selectivos en municipios como Toribío y Miranda (Cauca) (Funcionario de ONG, comunicación personal, 2025). El Frente 57 se calcula que tiene unos 90 miembros y opera en 14 municipios³. Por el momento, sigue siendo una disidencia independiente de las otras, aunque se la ha vinculado con la CN-EB, no existe evidencia que se le haya unido formalmente.

3.4. Riesgo por injerencia de EGC y ACSN

Los departamentos con más números de municipios con injerencia del EGC son Antioquia, Atlántico, Casanare, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y Vichada, que superan el 50 por ciento del total de los municipios de cada departamento (Tabla 4). Con respecto a las ACSN, tienen injerencia en Magdalena, La Guajira y Cesar, este último resultado de una reciente expansión territorial.

2 Los CdF afirman que hacen parte de la CN-EB, sin embargo, la Fundación CORE y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) han argumentado que, desde un punto de vista del Derecho Internacional Humanitario (DIH), los CdF no hacen parte de una sola organización.

3 Información obtenida a partir del Trabajo de campo CORE, en Cauca, Putumayo, Guaviare, Caquetá y Nariño.

Tabla 4. Número de municipios por departamento con riesgo de injerencia del EGC y ACSN

Departamento	Municipios En Riesgo Por ACSN	Municipios En Riesgo Por EGC	Municipios En Riesgo Por EGC	Porcentaje ACSN	Porcentaje EGC
Antioquia		78	125	0	62,4
Atlántico		6	23	0	26,1
Bolívar		22	46	0	47,8
Boyacá		1	123	0	0,8
Casanare		12	19	0	63,2
Cesar	4	22	25	16	88,0
Chocó		27	31	0	87,1
Córdoba		27	30	0	90,0
Cundinamarca		4	116	0	3,4
Guajira	9	10	15	60	66,7
Magdalena	6	26	30	20	86,7
Meta		13	29	0	44,8
N. De Santander		1	40	0	2,5
Quindío		1	12	0	8,3
Risaralda		2	14	0	14,3
San Andrés		1	2	0	50,0
Santander		9	87	0	10,3
Sucre		17	26	0	65,4
Tolima		2	47	0	4,3
Valle		6	42	0	14,3
Vichada		3	4	0	75,0
Total	19	290	1123	1,69	25,8

Desde finales de 2023 las Autodefensas Gaitanistas tomaron la decisión de llamarse “Ejército Gaitanista de Colombia- EGC”, con la intención de ganar reconocimiento político en el marco de la “Paz Total”. En septiembre de 2025 el gobierno reconoció a este grupo como un Grupo Armado Organizado mientras se adelanta una Conversación Socio Jurídica en Qatar. Con este reconocimiento buscan que este grupo respete el Derecho Internacional Humanitario (Presidencia de la República, 2025). Se estima que lo conforman 8.945 miembros y tiene 290 municipios en riesgo de injerencia.

El EGC tiene alto reclutamiento de jóvenes, aunque sus liderazgos locales incluyen ex combatientes de distintos grupos armados y narcotraficantes (CORE, 2025). Se caracteriza por reclutar miembros con formación militar, lo que les ha permitido expandirse en el territorio. Su injerencia se encuentra en Antioquia, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Chocó, Meta, Casanare, Vichada y Norte de Santander.

Las ACSN son un grupo sucesor del paramilitarismo que heredó su poder del Frente Tayrona de las extintas AUC y de su excomandante Hernán Giraldo Serna; fueron conocidos como “Los Pachencas” hasta el 2018 (Defensoría del Pueblo, 2018). Tienen injerencia principalmente en Santa Marta, Ciénaga

(Magdalena), Dibulla, Riohacha (La Guajira), El Copey, Pueblo Bello (Cesar). Este grupo ha mantenido un espacio de conversación socio jurídico desde agosto de 2024 (El Espectador, 2025), con una suspensión en abril de 2025; aunque se oficializó la negociación en septiembre de 2025, aún no hay mayores avances. Tiene 419 miembros en 19 municipios en riesgo por injerencia (Defensoría del Pueblo, 2025a).

4. Riesgo por intensidad de acciones

En esta sección se identifica el número de municipios, por departamento, que presentan riesgo por intensidad de acciones de los grupos armados. Primero, se presenta el riesgo del ELN y los Comuneros del Sur; segundo, las disidencias del EMC y del EMBF; tercero, las disidencias de la Segunda Marquetalia, el CN-EB y el Frente 57; y finalmente, el EGC y las ACSN. Para cada grupo armado se describe cómo se han comportado con respecto a los combates con la fuerza pública, enfrentamientos entre grupos armados ilegales y las afectaciones a la población civil.

La intensidad de las acciones de los grupos armados ilegales puede variar dependiendo de varios factores, como la multiplicidad de grupos armados en disputa, entre ellos y con el Estado

(Dowd, 2025). También, según sea la interacción, es decir si están en disputa o tienen pactos de no agresión o alianzas. Por último, si los grupos armados tienen la capacidad de enfrentarse militarmente, es decir si están en condiciones de sostener enfrentamientos frecuentes e intensos.

En regiones como la Cordillera nariñense, se conformó la “triada” entre Comuneros del Sur, la CN-EB y la AUN para enfrentar al EMC. En regiones como el Chocó y Bajo Cauca, el EGC se enfrenta al ELN y al EMC. Adicionalmente, desde el año pasado se inició la confrontación entre el EMC y EMBF en Guaviare y Caquetá.

En el Pacífico nariñense la CN-EB es el actor hegemónico que mantiene injerencia militar, política y económica, por lo que la población se encuentra sumida bajo su control territorial. En el

sur de Córdoba ocurre algo semejante, pues el EGC, desde hace años, mantiene su dominio, con menos intensidad de violencia física, pero con un fuerte control en la vida de la comunidad.

4.1. Riesgo por intensidad de acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Comuneros del Sur

En cuanto al número de municipios clasificados según el nivel de riesgo de injerencia (medio, alto y extremo), así como el total de municipios en riesgo y el porcentaje que representan frente al total departamental, los departamentos con mayor número de municipios en riesgo extremo son Bolívar, Chocó y Norte de Santander, los cuales concentran los enfrentamientos contra otros grupos armados y contra la fuerza pública.

Tabla 5. *Municipios con riesgo por intensidad por las acciones del ELN y los Comuneros del Sur*

Departamento	Medio	Alto	Extremo	Total	Total municipios por departamento	Porcentaje
Antioquia	10		3	13	125	10,4
Arauca	4	1	1	6	7	85,7
Atlántico	1			1	23	4,3
Bogotá D.C.	1			1	1	100,0

Departamento	Medio	Alto	Extremo	Total	Total municipios por departamento	Porcentaje
Bolívar	1		6	7	46	15,2
Boyacá	3			3	123	2,4
Casanare	3			3	19	15,8
Cauca	14	3	3	20	42	47,6
Cesar	7			7	25	28,0
Chocó	9	1	4	14	31	45,2
La Guajira	3			3	15	20,0
Nariño	3	1		4	64	6,3
Norte de Santander	13	2	4	19	40	47,5
Risaralda	2			2	14	14,3
Santander	4			4	87	4,6
Valle del Cauca	2		1	3	42	7,1
Total	80	8	22	110	1123	9,8

Elaboración: CORE con información suministrada por la MOE

4.1.1. Combates entre la fuerza pública y ELN y hostigamientos contra la fuerza pública

El Catatumbo es la región donde el accionar armado del ELN intensificó de mayor manera en el 2025, por cuenta de la disputa con el Frente 33 del EMBF. Esto implicó el desarrollo de enfrentamientos, combates con la fuerza pública y homicidios, confinamientos y desplazamientos contra la población civil; otro elemento para destacar es el uso de drones cargados con explosivos.

En el departamento de Arauca, bastión del ELN, a través del Frente Domingo Laín, se han presentado combates con las Fuerzas Armadas y ataques a infraestructura militar y petrolera con explosivos a los oleoductos Caño Limón en Saravena, Fortul, Arauquita y Arauca.

En lo corrido del año, en el norte y nordeste antioqueño, el ELN ha hecho acciones para atentar contra la fuerza pública, utilizando explosivos improvisados. Este grupo armado se

atribuyó la muerte de 13 policías en Amalfi (ELN, 2025), aunque el hecho fue inicialmente adjudicado al Frente 36 del EMBF.

4.1.2. Enfrentamientos entre grupos armados, relacionamiento de los grupos armados ilegales

El ELN en Arauca está en disputa con el Frente 10 del "EMC", desde el 2022 cuando se rompió el pacto de no agresión que tenían. Desde entonces se estableció una frontera entre varias veredas entre Tame, Arauquita y Puerto Rondón, donde, en grandes rasgos, el ELN quedó con el control del Sarare y el Frente 10 en la sabana. Sin embargo, desde entonces ha habido enfrentamientos entre el ELN y las disidencias en algunas veredas de Tame (CORE, 2025).

A mediados de 2025, en el macizo caucano empezaron a presentarse enfrentamientos entre el EMC y el ELN, cuando el EMC anunció la creación del Frente Andrés Patiño. Aunque en la región ya había injerencia de ambos grupos armados, el ELN tiene mayor control social y territorial en esta subregión, pero el EMC le declaró la guerra. Desde entonces se han dado enfrentamientos en Almaguer, Bolívar, Sucre y Totoró (OCHA, 2025).

Otro escenario de confrontación que tiene el ELN es en el Sur del Bolívar, con el EGC, el cual ha logrado expan-

dirse en Simití, San Pablo y Arenal. En el sur del Bolívar, Magdalena Medio y Nordeste antioqueño el ELN y el EMBF mantenían una alianza para enfrentar la expansión del EGC. Sin embargo, desde junio de 2025 ha habido una fractura por el apoyo militar de los Frente 24 y 37 del EMBF al Frente 33 en el Catatumbo (ELN, 2025). Desde entonces, los enfrentamientos que ha tenido el ELN con el EGC no han recibido apoyo de las disidencias.

4.1.3. Afectaciones en la población civil

El ELN en el Chocó ha anunciado en 2025 cuatro paros armados, causando el confinamiento de poblaciones indígenas y afrocolombianas sobre el río Baudó, subregión de Atrato (La Silla Vacía, 2025); en el 2024 este departamento concentró el mayor número de personas afectadas por confinamiento (ICRC, 2025). En diciembre de 2025, el ELN anunció un paro armado a nivel nacional durante el cual han perpetrado ataques, bloqueos, amenazas y restricciones de movilidad. Las regiones afectadas fueron Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Bajo Cauca antioqueño, Arauca, Catatumbo, Cauca, Chocó, La Guajira, Nariño, Cesar, Boyacá y Casanare (El Espectador, 2025).

En el Catatumbo la confrontación armada entre el ELN y las disidencias ha tenido impactos en la población civil, como los desplazamientos que

se dieron principalmente a inicios de 2025, dejando al menos 87.438 personas desplazadas (Puesto de Mando Unificado de la región del Catatumbo, 2025). Además, se registraron los homicidios de tres líderes sociales y seis firmantes de paz de las antiguas FARC (Indepaz, 2025). En estos hechos el ELN buscó atacar lo que consideran la base social de la disidencia, a través del desarraigo de sus familias y conocidos⁴.

Los enfrentamientos entre el ELN y el EGC, en el sur de Bolívar y Nordeste antioqueño, han provocado un incremento de amenazas, desplazamientos, homicidios y confinamientos, con graves afectaciones para la población

civil. En Antioquia el confinamiento aumentó más de seis veces en comparación con el año 2024 (CICR, 2025).

4.2. Riesgo por intensidad de acciones de las disidencias del EMC y el EMBF

La intensidad de las acciones de las disidencias del EMC se concentra principalmente en el Cauca, con 13 municipios en riesgo extremo, seguido por Guaviare. Por su parte, el EMBF focaliza su accionar en la región del Catatumbo y en el nordeste antioqueño (Tabla 6). En estas regiones se concentran los principales escenarios de confrontación, tanto con la Fuerza Pública como entre estos grupos armados y otras estructuras armadas.

Tabla 6. Municipios con riesgo por intensidad de acciones del EMC y EMBF

Departamento	Medio	Alto	Extremo	Total	Total municipios por departamento	Porcentaje
Amazonas	1			1	11	9,09
Antioquia	13	1	3	17	125	13,60
Arauca	1		1	2	7	28,57
Bolívar	4			4	16	25,00
Caquetá	6			6	19	31,58
Cauca	13	6	13	32	42	76,19

4. Información obtenida a partir del trabajo de campo CORE, en Norte de Santander.

Departamento	Medio	Alto	Extremo	Total	Total municipios por departamento	Porcentaje
Cesar	1			1	25	4,00
Guaviare			4	4	4	100,00
Huila	10	1		11	37	29,73
Meta	7		1	8	64	12,50
Nariño	7		2	9	40	22,50
Norte de Santander	6		4	10	13	76,92
Putumayo		1	1	2	87	2,30
Tolima	3			3	47	6,38
Valle del Cauca	8	1	2	11	42	26,19
Total	80	10	31	121	1123	10,77

Elaboración: CORE con información suministrada por la MOE

4.2.1. Combates entre la fuerza pública y “EMC” y “EMBF” y hostigamientos contra la fuerza pública

La suspensión del cese al fuego, en abril de 2024, y la ruptura en mesa de negociación con el “EMC”, han intensificado las acciones armadas de ambas disidencias contra la fuerza pública. En el Cauca, el “EMC” es el actor con más injerencia y, entre enero a noviembre de 2024, fue responsable de 122 acciones

armadas⁵, mientras que, en el mismo periodo de 2025, realizó 222 acciones, es decir tuvo un incremento del 82%⁶. Un fenómeno representativo en esta región es el uso de drones con artefactos explosivos que, aunque buscan atacar instalaciones militares y de policía, su uso resulta indiscriminado y causa impactos para la población civil.

Así mismo, desde octubre de 2024 el gobierno comenzó la ‘Operación Perseo’, en El Plateado, Argelia y Cauca,

5 Se incluyen acciones como combates, ataques con explosivos, emboscadas, incursiones y hostigamientos.

6 Información obtenida a partir de Monitoreo de hechos de violencia a partir de información de OCHA, otras fuentes secundarias y trabajo de campo de CORE.

estrategia militar destinada a debilitar al “EMC” y recuperar la presencia del Estado en el Cañón del Micay. Esta operación aumentó el número de combates y la respuesta de las disidencias a través de hostigamientos a la fuerza pública con explosivos y la presión sobre las comunidades.

Sobre el EMBF, el gobierno mantuvo un cese al fuego y posterior cese de hostilidades hasta mayo de 2025⁷. Sin embargo, en junio, el Ejército atacó al Frente Rodrigo Cadete, en la vereda Puerto Pores de Cartagena del Chairá, Caquetá. Esto dejó en suspenso la continuidad de las negociaciones de paz y con la reactivación de las operaciones militares se han registrado combates en Algeciras y Baraya (Huila), Cartagena del Chairá (Caquetá) y San José del Guaviare.

4.2.2. Enfrentamientos entre “EMC” y “EMBF”, y otros grupos armados

Después de la ruptura del “EMC” la Amazonía ha sido escenario de la confrontación armada entre los frentes liderados por ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’. En el Guaviare, desde enero de 2025 la situación ha venido escalando: en zona rural

de Calamar, ambos frentes combatieron y dejaron como resultado 20 muertos, entre los que se encontraban menores de edad reclutados. Así mismo, se han registrado enfrentamientos en San José del Guaviare, El Retorno y Calamar⁸.

Un escenario reciente de confrontación es en el macizo caucano, donde el “EMC” creó el Frente Andrés Patiño para disputar el control casi hegemónico que tiene el ELN (Estado Mayor Central, 2025). Aunque la injerencia del “EMC” en esta subregión no es nueva, pues antes operaba el Frente Carlos Patiño, con este desdoblamiento las disidencias buscan ampliar su zona de injerencia y probablemente consolidar una zona de refugio ante la entrada de la fuerza pública en el Cañón del Micay. En esta región se han registrado enfrentamientos en Almaguer, Bolívar y Totoró.

En Briceño, Antioquia, se ha configurado recientemente un escenario de confrontación marcado por fracturas internas en las disidencias del EMBF, derivado en la aparición de nuevos actores armados. Entre mayo y mediados de septiembre de 2025, las tensiones entre los frentes 18 y 36 del Bloque

7 El 27 de abril, el Frente Jhon Linares atacó al Ejército en vereda la Guapalo del municipio de San José del Guaviare, cuando se encontraban en suspensión de operaciones militares. Sin embargo, el EMBF aseguró que fue un “accidente”, pues pensaron que estaban enfrentándose a las unidades lideradas por ‘Mordisco’.

8 Los datos se obtienen a partir del Monitoreo de hechos de violencia a con información de OCHA, otras fuentes secundarias y trabajo de campo de CORE.

Magdalena Medio, se intensificaron tras la orden de retomar el control de Itunango, lo que provocó enfrentamientos en el casco urbano de Briceño (Defensoría del Pueblo, 2025a). Estas dinámicas evidenciaron la fragmentación de las estructuras, el surgimiento de disidencias como las “Guerrillas Campesinas Los Cabuyos” y el cambio de fracción del Frente 18, que pasó a ser parte del EMC, según fuentes de inteligencia militar (El Colombiano, 2025).

4.2.3. Afectaciones en la población civil

El accionar de las disidencias en el suroccidente del país ha causado homicidios en contra de la población, especialmente líderes sociales y firmantes de paz. El departamento con más líderes sociales, políticos y asesinados es el Cauca, con 21 en el año 2025 (Misión de Observación Electoral, 2025). Otro fenómeno en este departamento es el reclutamiento forzado de menores, del cual no hay cifras totalmente confiables, pues se presenta un subregistro. Sin embargo, solo en 2024 se reportaron 300 menores reclutados en el Cauca, mientras que en el 2023 se habían reportado 125 (Defensoría del Pueblo, 2025). La población indígena es la más afectada por esta problemática, aunque también hay meno-

res campesinos y afrocolombianos que están siendo reclutados.⁹

En medio de la confrontación entre los frentes del “EMC” y del EMBF, la población civil se ha visto acorralada por estos grupos. Se han dado restricciones a la movilidad, como el toque de queda que anunció el Frente 44, entre el 16 y 21 de junio de 2025, en San José del Guaviare. Por otro lado, la población civil recibe mensajes por WhatsApp y panfletos de ambos bandos, donde los presionan para asistir a reuniones, les prohíben interactuar con el grupo rival y extorsionan (Vélez, 2025).

En noviembre de 2025, luego de que la fuerza pública bombardeara unidades del EMC en Calamar, Guaviare, el líder de este grupo armado, ‘Morisco’, apareció en un video afirmando que iban a “asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrillerismo y la corrupción” (El Espectador, 2025a). Esto es una amenaza directa al desarrollo de las elecciones nacionales en los territorios donde este grupo armado tiene injerencia.

4.3. Riesgo por intensidad de acciones de las disidencias del SM, CN-EB y Frente 57

⁹ Datos obtenidos a partir del Trabajo de campo realizado en los departamentos de Cauca, Putumayo, Guaviare, Caquetá y Nariño.

En cuanto al riesgo por intensidad de acciones, las disidencias de la Segunda Marquetalia han concentrado su accionar principalmente en los departamentos de Meta, Vichada y Caquetá. Por su parte, las disidencias de la CN-EB, en particular los Comandos de Frontera,

han desarrollado acciones armadas en el Bajo Putumayo y en el Pacífico nariñense, pese a encontrarse en un proceso de negociación de paz con el Gobierno nacional. Finalmente, el Frente 57 concentra su confrontación armada en el norte del Cauca (Tabla 7).

Tabla 7. Municipios con riesgo por intensidad de acciones SM, CN-EB y Frente 57

Departamento	Medio	Alto	Extremo	Total	Total municipios por departamento	Porcentaje
Caquetá	2			2	16	12,5
Cauca	1	4		5	42	11,9
Meta	2		1	3	29	10,3
Nariño	5	2	1	8	64	12,5
Putumayo	1	3		4	13	30,8
Valle del Cauca	4			4	42	9,5
Vichada	2			2	4	50,0
Total	17	9	2	28	1123	2,5

Elaboración: CORE con información suministrada por la MOE

4.3.1. Combates entre la fuerza pública y Segunda Marquetalia y CN-EB y hostigamientos contra la fuerza pública

Pese a que la CN-EB mantiene las negociaciones de paz con el gobierno, no tienen un cese de operaciones militares. Por esta razón, durante 2025 se registraron combates con el Ejército en Magüi Payán, Ricaurte y Roberto

Payán (Nariño), Puerto Leguizamo y Puerto Guzmán (Putumayo) y Curillo (Caquetá). Desde inicios de 2023, se han disminuido las operaciones militares adelantadas contra estas estructuras. Esto puede deberse a que la CN-EB no combate directamente a la fuerza pública, posiblemente como una estrategia para no llamar la atención de las autoridades y así consolidarse territorialmente. Además, en Nariño, Putu-

mayo y Caquetá, enfocan sus capacidades militares en las disputas que tienen con otros grupos armados.

Con respecto a la Segunda Marquetalia, comandada por 'Iván Márquez', se han reportado capturas y bajas en combates durante el 2025. Por ejemplo, en marzo y abril se presentaron dos enfrentamientos en Cumaribo (Vichada); en julio, en la vereda Alto de la Bodega de San Juan de Arama, Meta se registró otro combate; por último, también se presentaron confrontaciones en Puerto Concordia, Meta entre este grupo armado y la fuerza pública.

4.3.2. Enfrentamientos entre Segunda Marquetalia y CN-EB y otros grupos armados

La Segunda Marquetalia y el ELN han entrado en confrontación, principalmente en territorio venezolano, en la frontera con Arauca y Guainía. Esto se hizo evidente en agosto con el asesinato de 'Zarco Aldinever', comandante de la SM, en la frontera entre Colombia y Venezuela, en una emboscada del Frente de Guerra Oriental del ELN (Segunda Marquetalia, 2025). Estos dos grupos armados mantenían acuerdos para el control de la minería de oro y coltán y los corredores de narcotráfico (InSight Crime, 2025).

Pese a que en la cordillera nariñense la "triada", entre la que se encuentra

la CN-EB, tiene un pacto de no agresión con el "EMC", la población civil afirma la "triada" podría estar aprovechando el accionar de la fuerza pública contra el "EMC" para expandirse en el territorio (Meridiano Regional, 2025). Esto después de que en mayo se diera un combate entre fuerza pública y "EMC" en los corregimientos de Damasco y Santa Rosa, Cumbitara.

4.3.3. Afectaciones en la población civil

En Nariño uno de los riesgos para la población civil ha sido la presencia de minas antipersona (MAP), pues es el segundo departamento con mayor cantidad de víctimas de este hecho en 2025. Sin embargo, ha habido una disminución del 20 por ciento en el número de víctimas de minas con respecto al 2022 (Sistema de Información de Acción Contra Minas Antipersonal, 2025). Aunque en lo corrido del año 2025, 13 de las 16 víctimas de MAP han sido miembros de la fuerza pública, la presencia de estos artefactos limita la movilidad y al acceso a tierras agrícolas, caminos y fuentes de agua de las comunidades.

4.4. Riesgo por intensidad de acciones del EGC y las ACSN

En cuanto a la intensidad de las acciones armadas, el accionar del EGC se concentra en Antioquia, con 12 muni-

cipios en riesgo extremo en las subregiones del norte, nordeste, el Bajo Cauca y Magdalena Medio, seguido por el Sur de Bolívar y Chocó. Por su

parte, las ACSN concentran su accionar en Santa Marta, Ciénaga, y Riohacha, La Guajira (Tabla 8).

Tabla 8. Riesgo por intensidad de acciones armadas EGC y ACSN

Departamento	Medio	Alto	Extremo	Total	Total municipios por departamento	Porcentaje
Antioquia	25	7	12	44	125	35,2
Bolívar	8	1	5	14	46	30,4
Casanare	1			1	19	5,3
Cesar	4	1		5	25	20,0
Chocó	4	1	2	7	31	22,6
Córdoba	6		1	7	30	23,3
La Guajira	6			6	15	40,0
Magdalena	7		1	8	30	26,7
Risaralda	3			3	14	21,4
Santander	1			1	87	1,1
Sucre	7			7	26	26,9
Tolima	1			1	47	2,1
Valle del Cauca	3	1		4	42	9,5
Total	76	10	21	108	1123	9,6

Fuente: Elaboración propia con datos CORE e información suministrada por la MOE.

4.4.1. Combates entre la fuerza pública y EGC y ACSN y hostigamientos contra la fuerza pública

Aunque el EGC se encuentra adelantando diálogos para someterse a la justicia con el Gobierno, no han adopta-

do un cese al fuego o de operaciones militares. En el 2025, la confrontación entre el EGC y la fuerza pública ha estado concentrada especialmente en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, con al menos 30 combates y hostiga-

mientos registrados.¹⁰ Otros departamentos donde se han presentado combates son Córdoba, Valle del Cauca, Sur de Bolívar, Chocó y Risaralda.

4.4.2. Enfrentamientos entre grupos armados, relacionamiento de los grupos armados ilegales

El EGC y las ACSN se encuentran en disputa por el control de la Troncal del Caribe desde el 2018; esta zona es un corredor estratégico para el tránsito y la gestión de diversas economías ilegales. En 2023, como parte de su proceso de fortalecimiento y expansión territorial, el EGC intentó incursionar en la región, lo que intensificó la confrontación entre ambos grupos (Defensoría del Pueblo, 2023).

Durante 2025, esta disputa se ha materializado en enfrentamientos en varios puntos críticos, entre ellos el corregimiento de Palmor, en Ciénaga (Magdalena), y áreas rurales de Riohacha, (La Guajira) (OCHA, 2025). Mientras tanto, las ACSN mantienen un control consolidado en Santa Marta, Dibulla y Ciénaga, y se han expandido hacia nuevos territorios del Magdalena y Cesar. Su incursión reciente abarca municipios como Pueblo Viejo, Algarrobo, Fundación, Aracataca, El Retén, El Copey, Bosconia, Pueblo Bello,

Valledupar, así como El Paso, San Juan del Cesar, Distracción y Fonseca. Esta expansión tiene como objetivo asegurar corredores estratégicos y ganar legitimidad social en las comunidades donde han incrementado su injerencia (Defensoría del Pueblo, 2025).

Otra confrontación que tiene el EGC es con el ELN en el departamento del Chocó. Allí la disputa se ha dado en la subregión de San Juan, que compone los municipios de Sipí, El Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan y Novita; en el Litoral Pacífico en el municipio Alto Baudó; y en Atrato en el municipio El Carmen de Atrato (OCHA, 2025). Esta confrontación se debe al interés por mantener el control de las rentas de narcotráfico, rutas para el paso de la cocaína y la minería ilegal. No obstante, desde el 2022 el EGC le ha ganado territorio al ELN, especialmente en el Pacífico Norte, en Juradó, Nuquí y Bahía Solano (Defensoría del Pueblo, 2024).

4.4.3. Afectaciones en la población civil

En la troncal del Caribe, especialmente en zonas rurales, el EGC y ACSN son responsables de múltiples homicidios selectivos, con prácticas como la tortura y desmembramiento. Esto puede ser una estrategia para generar terror

10 Los datos se obtuvieron a partir del Monitoreo de hechos de violencia elaborado con información de OCHA, otras fuentes secundarias y trabajo de campo de CORE

en la población civil, como y demostrar poderío frente al grupo armado contrincante. Otros homicidios van dirigidos contra población vulnerable y estigmatizada, por su procedencia o como castigo por no pagar extorsiones (Defensoría del Pueblo, 2023).

En el sur de Córdoba y Montes de María, donde el EGC es el grupo hegemónico, se han presentado amenazas y atentados a líderes sociales y políticos. Durante el 2025 hay registro de al menos ocho amenazas a líderes y tres atentados en el sur del Córdoba, mientras que en Montes de Bolívar circuló un panfleto firmado por el EGC, amenazando a líderes políticos de partidos de izquierda como el Polo Democrático, Colombia Humana, Partido Comunista, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos (El Tiempo, 2025).

En el Chocó, durante 2024, se concentró el 41 % de la población confinada de todo el país. Este departamento presentó un aumento considerable en el número de eventos: pasó de 8 en 2023 a 26 el año 2024 (ICRC, 2025). Durante el 2025 se han registrado enfrentamientos entre el EGC y el ELN en la subregión de San Juan, en municipios como Bajo Baudó, Novita, Istmina y Medio San Juan, ocasionando múltiples confinamientos y desplazamientos de población indígena y afrocolombiana.

5. Gobernanza armada e injerencia de los grupos armados en los procesos electorales

Los grupos armados ejercen formas de gobernanza armada en los territorios bajo su influencia mediante la provisión coercitiva de “protección” frente a actores enemigos, lo cual se traduce en control social, restricciones a la movilidad y regulación de la vida cotidiana de las comunidades. Esta gobernanza incluye la regulación de economías legales e ilegales, a través del control de precios, la extorsión sistemática y la imposición de reglas de convivencia. En contextos más extremos, esta capacidad de control se extiende a la injerencia directa en los procesos electorales, mediante amenazas, homicidios selectivos y la imposición o veto de candidaturas. De igual forma, en algunos territorios la población acude a los grupos armados para la resolución de conflictos, la imposición de sanciones o incluso la ejecución de obras comunitarias, lo que refuerza su legitimidad y profundiza la sustitución de funciones estatales (CORE, 2024).

En las mesas de negociación con CN-EB y EMBF, se incluyeron recientemente aspectos sobre el proceso electoral, las acciones armadas y de gobernanza armada. El EMBF, el 20 de noviembre de 2025, se compromete

tió a no interferir y respetar el normal desenvolvimiento de las elecciones de 2026 (Mesa de diálogos entre gobierno nacional y EMBF, 2025). En cuanto a la CN-EB, el 5 de diciembre firmaron un acuerdo con el gobierno nacional en el que se comprometen a no interferir en los procesos electorales, no adelantar acciones armadas ni proselitismo armado, respetar la libertad de las candidaturas y la neutralidad frente a las campañas, no imponer restricciones a la población civil, como limitaciones a la movilidad, ni condicionar el ejercicio del voto (Mesa de diálogo entre gobierno nacional y la CN-EB, 2025).

No obstante, aunque estos dos grupos armados pretenden demostrar que no son serán un riesgo para el desarrollo de las elecciones, los mecanismos con los que pueden ejercer gobernanza afectan la participación libre de la población donde tienen injerencia.

5.1. Restricciones a la movilidad y control de la vida comunitaria

Entre las prácticas que representan un riesgo estructural para el desarrollo del proceso preelectoral y electoral se encuentran los toques de queda, la carnetización de la población y las restricciones para ingresar o circular entre territorios. En zonas rurales de norte y sur del Cauca, Putumayo, Guaviare, Caquetá y Nariño se han documentado restricciones de movilidad

en las que la población debe portar carnés expedidos por el grupo armado o cartas de recomendación de las Juntas de Acción Comunal para poder transitar, lo que limita el acceso a información electoral y la libre participación política (CORE, 2025).

Las prohibiciones al acceso a la información y comunicación también pueden ser un ejemplo de control por parte de los grupos armados. Un ejemplo de ello se registró en Yondó (Antioquia) donde, en febrero de 2025, el ELN ordenó a excombatientes de las FARC retirar el servicio de internet en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Estas medidas tienen impactos directos en los procesos electorales, al restringir el acceso a información sobre las candidaturas, limitar la deliberación pública y debilitar el ejercicio de derechos políticos (Caracol Radio, 2025).

5.2. Amenazas, violencia política y resolución armada de disputas

Otro componente central de la gobernanza armada es la amenaza directa contra liderazgos políticos y sociales. Grupos como el EGC han recurrido a intimidaciones contra militantes y dirigentes de partidos políticos, a quienes declaran “objetivos militares” y obligan a abandonar el territorio. Estas prácticas generan un entorno de miedo que restringe la competencia

electoral y reduce las opciones reales de representación.

Asimismo, se han documentado situaciones en las que disputas políticas locales se resuelven de manera violenta, incrementando el riesgo de homicidios contra líderes y candidatos. Por ejemplo, en Nariño, a mediados de 2025, el asesinato de un líder indígena fue atribuido a una confrontación política por un cargo de representación, presuntamente respaldada por uno de los dos grupos armados en disputa (CORE, 2025). Este tipo de hechos evidencia cómo la violencia se instrumentaliza para dirimir conflictos políticos y consolidar cuotas de poder territorial.

5.3. Injerencia en el poder local: el caso de Arauca

El departamento de Arauca representa un caso de injerencia armada en el poder local. Desde su creación como departamento ha tenido diez gobernadores, de los cuales siete han sido investigados o condenados por presuntos vínculos con grupos armados. Varias investigaciones señalan nexos con el ELN, incluyendo financiación de campañas, apoyo electoral y desvío de contratos hacia redes asociadas al grupo armado (Torres, Sandoval, Peralta, y Gomez, 2025). De cara a las elecciones nacionales, especialmente en las Circunscripciones Especiales de Paz (CITREP), este historial plantea

un riesgo significativo para la realización de elecciones libres, dado que la participación política puede estar condicionada a la aprobación del ELN en determinados territorios.

5.4. Coacción electoral y percepción de imposición de autoridades

En el Putumayo, durante las elecciones atípicas de gobernador a inicios de 2025, se denunciaron presiones ejercidas por el grupo armado Comandos de la Frontera para favorecer a un candidato específico. Según testimonios de la población, se obligó a asistir a reuniones proselitistas y se permitió al candidato acceder a zonas vedadas para sus competidores (La Silla Vacía, 2025). Aunque la MOE no pudo corroborar plenamente estas denuncias debido a versiones contradictorias, la percepción predominante en las comunidades fue que el resultado electoral estuvo determinado por el grupo armado, lo cual erosiona la confianza ciudadana en la legitimidad del proceso democrático.

5.5. Relación entre autoridades locales y grupos armados en el Magdalena Medio

En el Magdalena Medio, líderes sociales han denunciado presuntas relaciones entre algunos gobiernos locales y el EGC. Según estas versiones, ciertos

alcaldes habrían contado con el apoyo del grupo armado, lo que influye en sus decisiones políticas, favoreciendo intereses criminales o bloqueando iniciativas relacionadas con justicia transicional, bajo discursos como “yo no trabajo con guerrilleros” (CORE, 2025). Esta dinámica no es nueva en la región, históricamente marcada por la presencia de estructuras sucesoras del paramilitarismo. La posible aspiración de exalcaldes a cargos como la Cámara de Representantes, utilizando mecanismos similares de favorecimiento armado, constituye un riesgo relevante para las próximas elecciones.

5.6. Reconfiguración armada y distorsión de patrones electorales

Cuando un grupo con injerencia histórica es desplazado o debilitado por otro, las relaciones de poder local se transforman, incluyendo las formas de control político. En territorios como el corregimiento de El Guayaibo (Puerto Wilches), donde el ELN ha tenido presencia prolongada, el avance reciente del EGC ha alterado las dinámicas comunitarias. Aunque la población mantiene tendencias electorales históricamente asociadas a sectores de izquierda, el nuevo actor armado dominante puede imponer preferencias políticas, restringir la participación o reorientar el voto hacia candidaturas afines a sus intereses, distorsionando

la expresión autónoma de la voluntad ciudadana (CORE, 2025).

5.7. Interferencia electoral y apoyo selectivo a candidaturas

Finalmente, en regiones como el Pacífico caucano y nariñense, se ha documentado que los grupos armados interfieren de manera estratégica en los procesos electorales. Estas estructuras analizan previamente qué candidaturas tienen mayores probabilidades de triunfo y, posteriormente, ofrecen beneficios como financiamiento, apoyo logístico, transporte de votantes o permisos para ingresar a zonas bajo su control (CORE, 2025). En el Cesar, existen alertas sobre una posible injerencia del EGC en las próximas elecciones nacionales, mediante el apoyo económico a candidaturas presidenciales afines a sus intereses, incluyendo la financiación de esquemas de compra de votos para asegurar

la continuidad de economías ilegales como el narcotráfico (MOE, 2025).

6. Conclusiones

Los grupos armados como el ELN, Comuneros del Sur, disidencias de las FARC, EGC, ACSN tienen injerencia en algunos territorios, en donde ejercen gobernanza armada, a través del control político, económico, social y en otros predominan disputas violentas

ambos tipos generan riesgos distintos para las elecciones nacionales de 2026.

El riesgo electoral no solo depende de la intensidad de las acciones armadas, sino de la capacidad de injerencia política y social de los grupos armados. En municipios donde no se identifican acciones armadas como enfrentamientos entre grupos armados, sí se identifican prácticas de coerción, restricciones de movilidad, amenazas a liderazgos y control de campañas políticas que condicionan la participación electoral. Esto explica las diferencias entre los municipios identificados con riesgo de injerencia y aquellos clasificados por intensidad de las acciones armadas.

Hechos violentos como desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y homicidios de líderes sociales y políticos, así como las restricciones a la movilidad, los toques de queda, la carnetización de la población y el control selectivo del acceso territorial, representan obstáculos directos para el desarrollo del proceso preelectoral y electoral. Estas prácticas limitan el acceso a información, impiden la libre circulación de candidatos y votantes, y reducen la posibilidad de realizar campañas políticas en igualdad de condiciones, afectando de manera desproporcionada a zonas rurales y comunidades históricamente marginadas.

El análisis territorial demuestra que, en departamentos como Arauca, Putumayo, Chocó, Magdalena Medio, Cauca, Nariño y Cesar, los grupos armados han logrado incidir de manera directa o indirecta en el poder local y regional. Esta injerencia se expresa tanto en el apoyo selectivo a candidaturas, la financiación ilegal de campañas y la compra de votos, como en la exclusión de aspirantes que no cuentan con el consentimiento del grupo armado. En estos contextos, las elecciones corren el riesgo de convertirse en procesos formales sin garantías reales de libertad y transparencia.

Aunque algunos grupos armados, como Comuneros del Sur, CN-EB, EMBF y el EGC mantienen procesos de diálogo con el gobierno, esos procesos no han implicado la disminución de la violencia. Otros grupos armados, como el EMC, han asegurado que harán acciones ofensivas a los territorios donde tiene injerencia en medio del proceso electoral. Por lo tanto, es necesario que se tomen medidas específicas de garantías electorales, especialmente en los municipios donde la intensidad de las acciones de los grupos armados está en riesgo extremo y alto.

7. Recomendaciones para garantizar la participación segura y la integridad del proceso electoral

De acuerdo con el análisis de los ries-

gos electorales, asociados a la injerencia de grupos armados en el territorio, es prioritario que las entidades responsables del desarrollo de las elecciones como el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Consejo Nacional Electoral (CNE), Registraduría Nacional, Fuerza Pública y Defensoría del Pueblo, adopten medidas integrales que fortalezcan la protección de los votantes y la transparencia del proceso electoral de 2026.

7.1. Medidas extraordinarias de seguridad y logística electoral

El Mapa de Riesgo Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE) permite identificar y priorizar los municipios con mayores niveles de riesgo. A partir de esta información, es necesario implementar medidas extraordinarias de logística electoral en los territorios más afectados. Entre estas acciones se recomienda habilitar mecanismos de votación anticipada, así como mesas especiales acompañadas por fuerza pública, rutas seguras y dispositivos de protección en zonas donde la injerencia de grupos armados condiciona la movilidad de la población. Para ello, la Registraduría y la Fuerza Pública deben coordinar el transporte seguro del material electoral, a través de dispositivos con supervisión civil-militar y presencia de observadores.

7.2. Protección prioritaria a candidaturas, liderazgos locales y testigos electorales

La persistencia de amenazas, intimidaciones y homicidios contra líderes políticos y sociales exige la activación de un programa temporal de protección electoral, focalizado en candidaturas y liderazgos locales ubicados en municipios con riesgo verificado. Este programa debe incluir esquemas de seguridad flexibles, sistemas de alerta temprana, asesorías de autoprotección y canales confidenciales de denuncia. Del mismo modo, es fundamental garantizar medidas ágiles de protección para testigos electorales y líderes sociales, quienes cumplen un rol esencial en la integridad de la jornada democrática. Estas acciones deben ser lideradas por el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo en articulación con la Fuerza Pública.

7.3. Mitigación del riesgo de coerción a la población civil

La gobernanza armada ejercida por distintos grupos ilegales, en anteriores procesos electorales, evidencia que pueden persistir prácticas de presión, coacción o control social dirigidas a influir en el comportamiento electoral de las comunidades. Para mitigar estos riesgos, se requiere una campaña masiva de información que garantice el acceso de la ciudadanía a contenidos

oficiales sobre derechos electorales, ubicación de los puestos de votación y mecanismos de denuncia. Esta estrategia debe difundirse por múltiples canales —SMS, radio comunitaria, perifoneo, redes sociales— y especialmente en zonas rurales con restricciones de movilidad o brechas de conectividad. Para ello, se necesita asegurar una mínima conectividad móvil y digital en áreas críticas, mediante esfuerzos coordinados entre la Registraduría, el Ministerio de TIC, organizaciones sociales y actores comunitarios.

7.4. Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y participación de la sociedad civil

Resulta indispensable ampliar y socializar los mecanismos rápidos de denuncia y respuesta frente a cualquier intento de intimidación o coerción relacionada con el proceso electoral. Plataformas como Pilas con el Voto de la MOE, junto con los canales de denuncia existentes del Estado, deben ser ampliamente comunicadas y acompañadas por la presencia territorial de la Defensoría, la Registraduría y la Fiscalía General de la Nación. La participación de la sociedad civil organizada, incluyendo veedurías, organizaciones comunitarias y observadores independientes, es clave para garantizar que las denuncias se tramiten de manera efectiva y que las comunidades cuenten con herramientas reales de protección.

7.5. Presencia de la Fuerza Pública en días críticos

Durante los días previos y el día de las elecciones, se recomienda desplegar una presencia visible, proporcional y garantista de la Fuerza Pública, con un mandato explícito de protección a los votantes y al proceso democrático. Esta presencia debe complementarse con la implementación de cordones humanitarios en centros de votación estratégicos, con participación de organizaciones humanitarias y observadores independientes. Tales medidas buscan asegurar condiciones de confianza y seguridad sin generar percepciones de intimidación o interferencia institucional en la jornada electoral.

7.6. Dispositivos tácticos complementarios: listas rojas, mesas móviles y centros alternativos

Se propone elaborar y publicar una “Lista Roja” electoral entre 72 y 48 días antes de las elecciones, identificando los municipios de riesgo extremo y asignando equipos interinstitucionales encargados de la logística, la seguridad y la protección social. Igualmente, es necesario establecer protocolos estandarizados de acceso seguro para la movilidad de candidatos, gestores de campaña y funcionarios, previendo acompañamiento policial y rutas verificadas. Para los territorios con restricciones extremas de movilidad,

deben habilitarse mesas móviles blindadas, trasladadas en caravanas seguras con acompañamiento de observadores internacionales. Finalmente, se recomienda identificar centros de votación alternativos en iglesias, instituciones educativas o universidades con accesos controlados y condiciones de resguardo adecuadas.

7.7. Recomendaciones políticas y de coordinación institucional

Se requiere que el gobierno, a través de los jefes negociadores de los procesos de espacios socio jurídicos y de diálogos de paz actualmente con CN-EB, EGC, EMBF y Comuneros del Sur, incluyan y monitoreen dentro de las negociaciones que avanza, los

compromisos sobre las garantías del desarrollo de las elecciones nacionales, que implique que estos grupos armados no realizar acciones armadas o de gobernanza armada que impidan la participación libre y democrática de la población.

Otro elemento clave es reforzar los mecanismos de control y trazabilidad del financiamiento electoral, especialmente en municipios con antecedentes de infiltración económica por parte de grupos armados o economías ilegales. Un sistema más estricto de vigilancia financiera, junto con sanciones oportunas, puede mitigar los riesgos de captura del proceso electoral.

Referencias

Caracol Radio. (2025, 14 de febrero). *Temor en Yondó: ELN irrumpió en Área de Reincorporación de firmantes de paz y exigió cortar internet*. <https://caracol.com.co/2025/02/14/temor-en-yondo-eln-irrupcio-en-area-de-reincorporacion-de-firmantes-de-paz-y-exigio-cortar-internet/>

CICR. (2025). *2025, camino a ser el peor año de la última década en cuanto a consecuencias humanitarias*. <https://www.icrc.org/sites/default/files/2025-07/Actualización%20Balance%20Humanitario%20CICR%202025%20%281%29.pdf>

CORE. (2025, 1 de marzo). *Las disidencias de las FARC-EP: Dos caminos de una guerra en construcción*. <https://www.conflictresponses.org/disidencias-de-las-farc-ep-dos-caminos-de-una-guerra-en-construccion-partes-1-y-2/>

CORE. (2024, 1 de marzo). *Disidencias de las FARC-EP Dos caminos de una guerra en construcción, parte 1*. <https://www.conflictresponses.org/disidencias-de-las-farc-ep-dos-caminos-de-una-guerra-en-construccion-partes-1-y-2/>

CORE. (2025). *Monitoreo de hechos de violencia a partir de información de OCHA, otras fuentes secundarias y trabajo de campo de CORE [Inédito]*. Defensoría del Pueblo. (2018, 7 de mayo). *Alerta Temprana N° 045-18*. <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/045-18.pdf>

Defensoría del Pueblo. (2023, 21 de junio). *Alerta temprana 025 de 2023*. <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/025-23.pdf>

Defensoría del Pueblo. (2024, 9 de abril). *Alerta 009 de 2024*. <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/009-24.pdf>

Defensoría del Pueblo. (2025, 18 de noviembre). *Alerta Temprana* N° 019-25. <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/019-25.pdf>

Defensoría del Pueblo. (2025, 21 de enero). *Reporte sobre casos de reclutamiento conocidos por la Defensoría del Pueblo durante 2024*. <https://www.defensoria.gov.co/en/-/reporte-sobre-casos-de-reclutamiento-conocidos-por-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-durante-2024>

Defensoría del Pueblo. (2025a, 2 de diciembre). *Alerta Temprana* 020-25. <https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3553199/AT+020-25+S-NSM.pdf/fc0760dc-7be4-ad71-e2d2-e006e1d-326d6?t=1764712045593>

Dowd, C. (2025). *Actor proliferation and the fragmentation of violent groups in conflict*. Research and Politics, 1-7.

El Colombiano. (2025, 29 de octubre). *Alerta de nuevo conflicto en Antioquia: alias Iván Mordisco se anexó el frente 18 de las Farc, que delinque en Ituango*. <https://www.elcolombiano.com/colombia/ivan-mordisco-frente-18-farc-ituango-antioquia-KH30404529>

El Espectador. (2025, 22 de febrero). *Hablan las Autodefensas de la Sierra: "Buscamos una salida dialogada, no la cárcel"*. <https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/petro-y-autodefensas-de-sierra-nevada-entrevista-con-jefe-de-acsn-santa-marta-clan-del-golfo/>

El Espectador. (2025a, 18 de noviembre). *Iván Mordisco reaparece en video tras bombardeos del Gobierno Petro en Arauca y Guaviare [Video]*. <https://www.youtube.com/watch?v=s2OEGpWxl4o>

El Espectador. (2025, 16 de diciembre). *Paro armado del ELN: Primeras 48 horas dejan al menos 51 ataques en 13 departamentos* [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=i-jWdxoywJZc>

ELN. (2025). *Parte de Guerra Frente de Guerra Darío Guerra Castro*.

ELN. (2025). *Comunicado Público Dirigido a las Comunidades del Sur de Bolívar, Nordeste Antioqueño y Magdalena Medio*. <https://fgsuroccidente.net/?p=1198>

ElTiempo. (2025, 11 de septiembre). *Reactivan el terror en los Montes de María: mediante panfleto, grupos criminales amenazan a partidos políticos y líderes sociales con una 'limpieza'*. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/reactivan-el-terror-en-montes-de-maria-con-panfleto-amenazan-a-partidos-politicos-y-lideres-sociales-con-limpieza-3489666>

El Tiempo. (2025, 24 de febrero). *Elecciones en Putumayo: ¿qué papel jugaron los 'Comandos de la Frontera' de alias Araña?* <https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/elecciones-en-putumayo-que-papel-jugaron-los-comandos-de-la-frontera-de-alias-arana-3429863>

Estado Mayor Central. (2025, 1 de julio). *Frente Andrés Patiño (07-2025)*. https://cedema.org/digital_items/10594

FIP. (2025, 9 de noviembre). *Lo que dicen las nuevas cifras sobre el aumento de integrantes de grupos armados en Colombia*. <https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2025-11/lo-que-dicen-las-nuevas-cifras-sobre-el-aumento-de-integrantes-de-grupos-armados-en-colombia>

ICRC. (2025). *Retos Humanitarios Colombia 2025*. <https://www.icrc.org/sites/default/files/2025-03/Balance%20Humanitario%20versión%20digital%202025.pdf>

ICRC. (2025, 27 de marzo). *Colombia: Confinamiento, desplazamiento y afectación a los medios de vida*. <https://www.icrc.org/es/articulo/confinamiento-desplazamiento-y-afectacion-los-medios-de-vida>

Indepaz. (2025). *Firmantes de acuerdo de paz asesinados en 2025*. <https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2024/>

InSight Crime. (2025, 8 de agosto). *Frontera entre Colombia y Venezuela en alerta por conflicto entre guerrillas*. <https://insightcrime.org/es/noticias/nueva-guerra-fronteriza-entre-guerrillas-colombia-venezuela/>

Johnson, K. (2023). *La gobernanza armada ilegal y su transferencia al Estado para construir la paz*. https://usercontent.one/wp/www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2023/09/DT2-2023_Kyle-Johnson.-Gobernanza-armada-ilegal.pdf?media=1683565386

La Silla Vacía. (2025, 23 de julio). *ELN anunció paro armado en Chocó tras operación militar*. <https://www.lasillavacia.com/en-vivo/eln-anuncio-paro-armado-en-choco-tras-operacion-militar/>

La Silla Vacía. (2025, 22 de febrero). *Putumayo: Pares alerta posible presión de disidencias a favor de candidato*. <https://www.lasillavacia.com/en-vivo/putumayo-pares-alerta-posible-presion-de-disidencias-a-favor-de-candidato/>

Meridiano Regional. (2025, 7 de mayo). *Cumbitara, Nariño: combates y temor de desplazamientos*. <https://meridianoregional.com/cumbitara-narino-en-riesgo-combates-y-temor-de-desplazamientos/>

Mesa de diálogo entre gobierno nacional y la CN-EB. (2025, 5 de diciembre). *Acuerdo 13 sobre garantías electorales y libre ejercicio del voto*. https://www.consejeriacomisionadadepaz.gov.co/Dialogos_con_la-Coordinadora-Nacional-Ejercito-Bolivariano/Documents/Acuerdos/ACUERDO_13__SOBRE_GARANTIAS_ELECTORALES_Y_LIBRE_EJERCICIO_DEL_VOTO.pdf

Mesa de diálogos entre gobierno nacional y EMBF. (2025, 20 de noviembre). *Acuerdo especial de la mesa de diálogos de paz para garantías electorales*.

Misión de Observación Electoral. (2025). *Seguimiento violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales*. MOE.

OCHA. (2025). *Monitor Humanitario*. <https://monitor.unocha.org/colombia>

OCHA. (2025, 24 de julio). *Informe de Tendencias e Impacto Humanitario en 2025 | Datos acumulados entre enero - junio de 2025*. <https://www.unocha.org/publications/report/colombia/informe-de-tendencias-e-impacto-humanitario-en-2025-datos-acumulados-entre-enero-junio-de-2025-fecha-de-publicacion-24-de-julio-de-2025>

Presidencia de la República. (2025). *Resolución Número 294 de 2025, por la cual se reconoce como Grupo Armado Organizado al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y se dictan otras disposiciones*.

Puesto de Mando Unificado de la región del Catatumbo. (2025, 18 de diciembre). *Boletín #150*. <https://caracol.com.co/2025/12/18/crisis-en-el-catatumbo-los-11-meses-de-conflicto-ha-dejado-mas-de-87-mil-personas-desplazadas/>

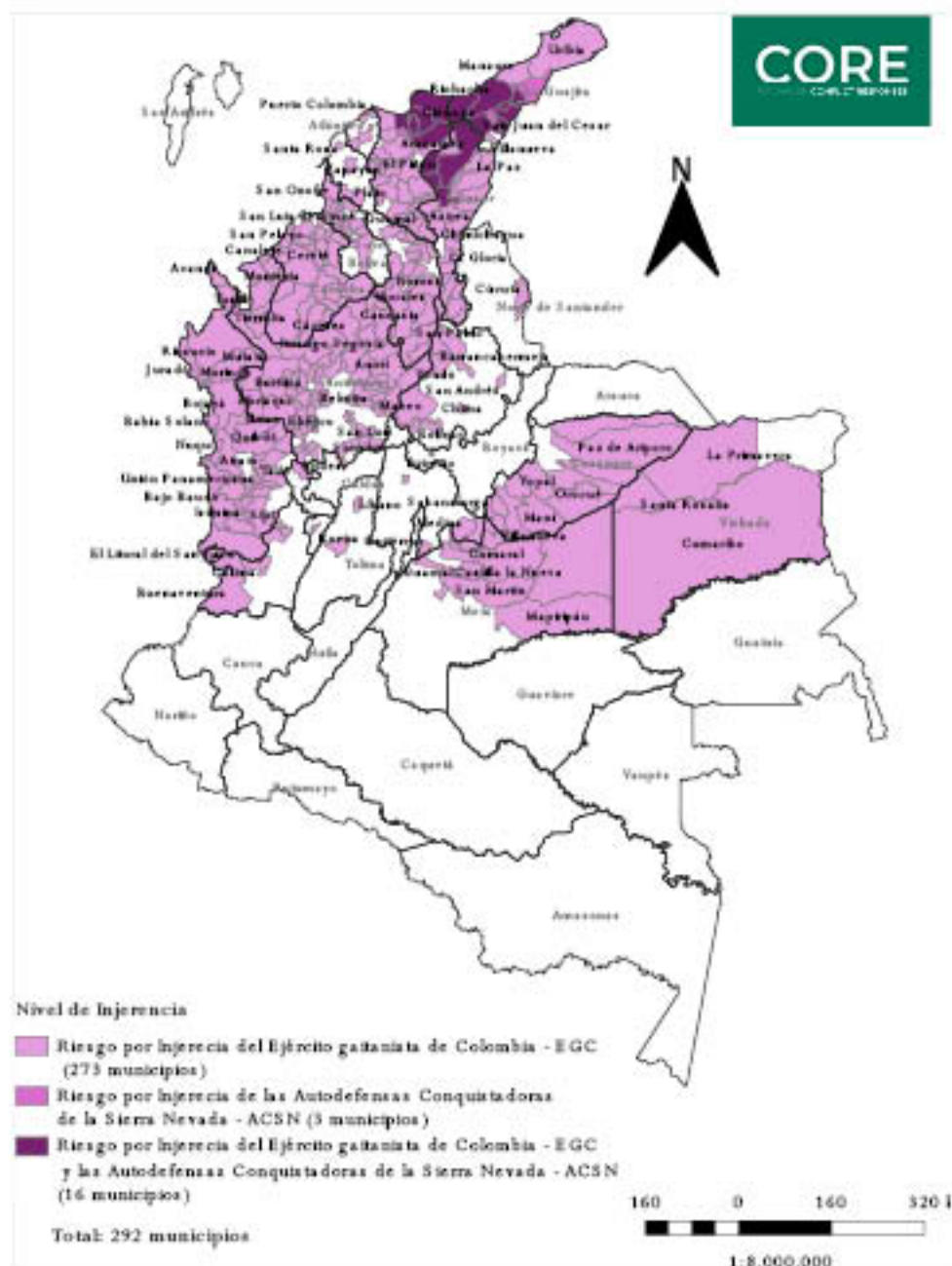
Segunda Marquetalia. (2025, 5 de agosto). *Comunicado ante el asesinato de Aldinever Morantes*. https://cedema.org/digital_items/10617

Sistema de Información de Acción Contra Minas Antipersonal. (2025, 31 de agosto). *Registro de información de afectación por MAP y MUSE e intervención*. <https://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/datos-abiertos>

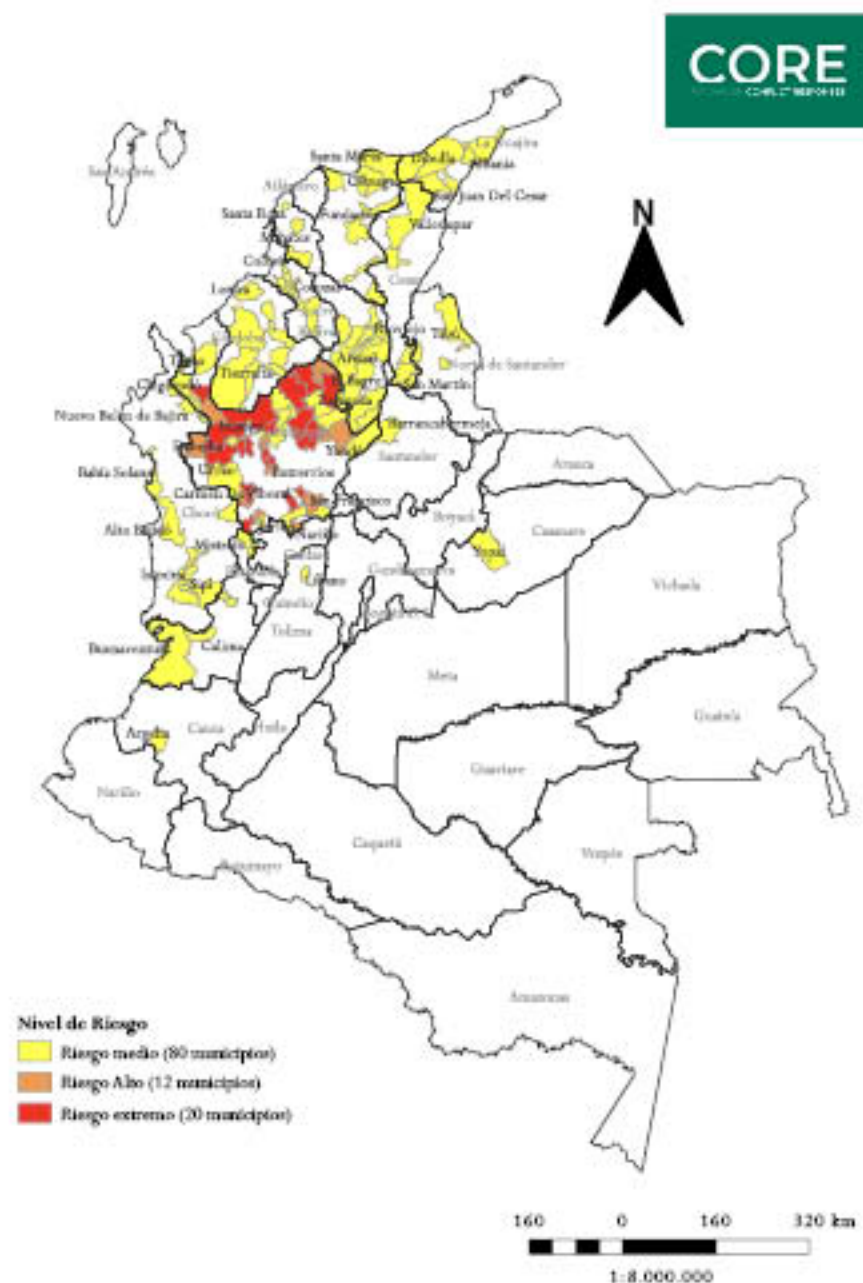
Torres, N., Sandoval, J., Peralta, M., y Gómez, F. (2025, 13 de marzo). *Arauca, el histórico fortín del ELN que refleja la infiltración de grupos armados en el poder*. Periódico Unal. <https://periodico.unal.edu.co/articulos/arauca-el-historico-fortin-del-eln-que-refleja-la-infiltracion-de-grupos-armados-en-el-poder>

Vélez, J. (2025, 31 de agosto). *El rompecabezas de la guerra de las disidencias en Guaviare*. Voragine. <https://voragine.co/historias/reportaje/el-rompecabezas-de-la-guerra-de-las-disidencias-en-guaviare/>

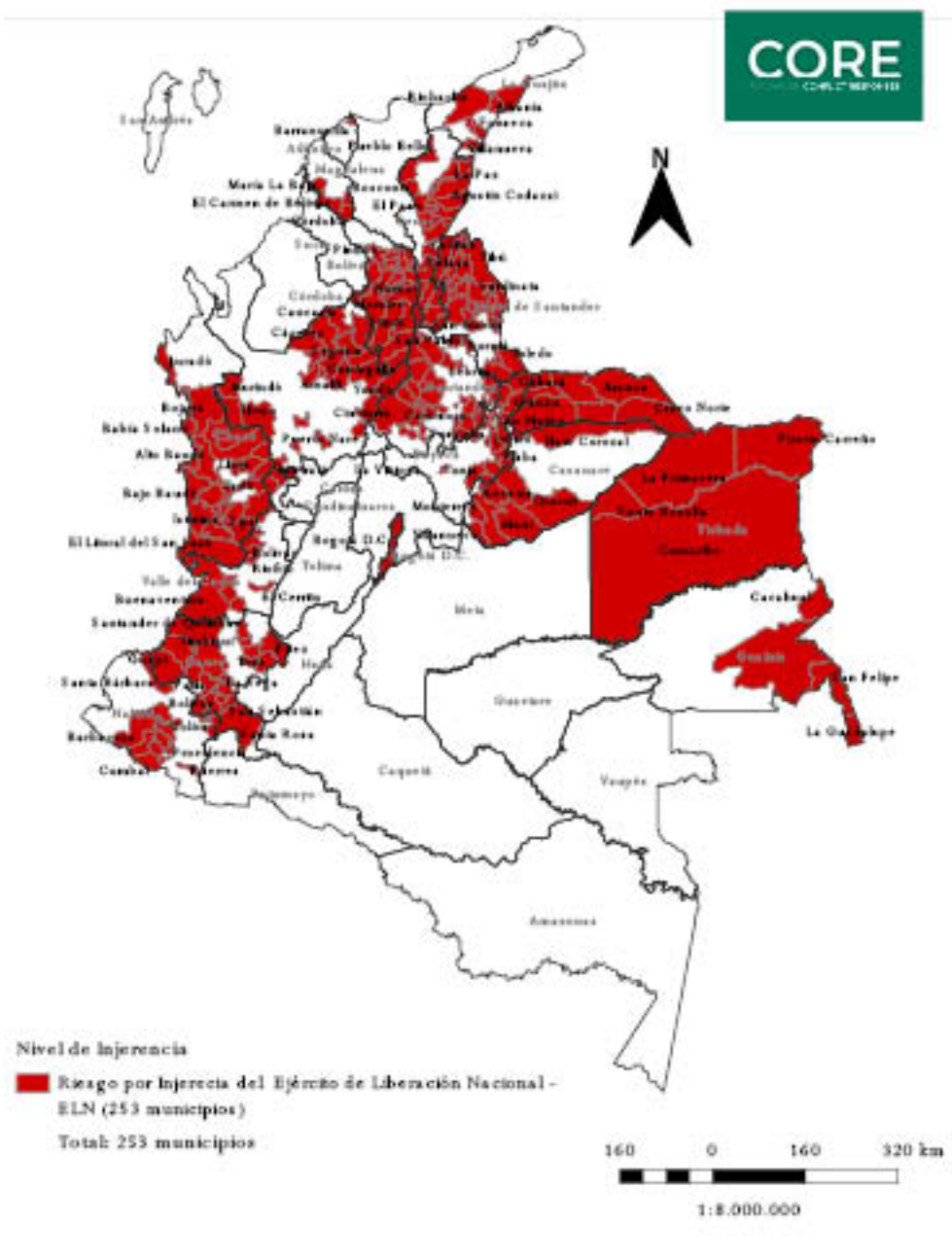
Mapa #33. Riesgo por injerencia del EGC y las ACSN elecciones 2026



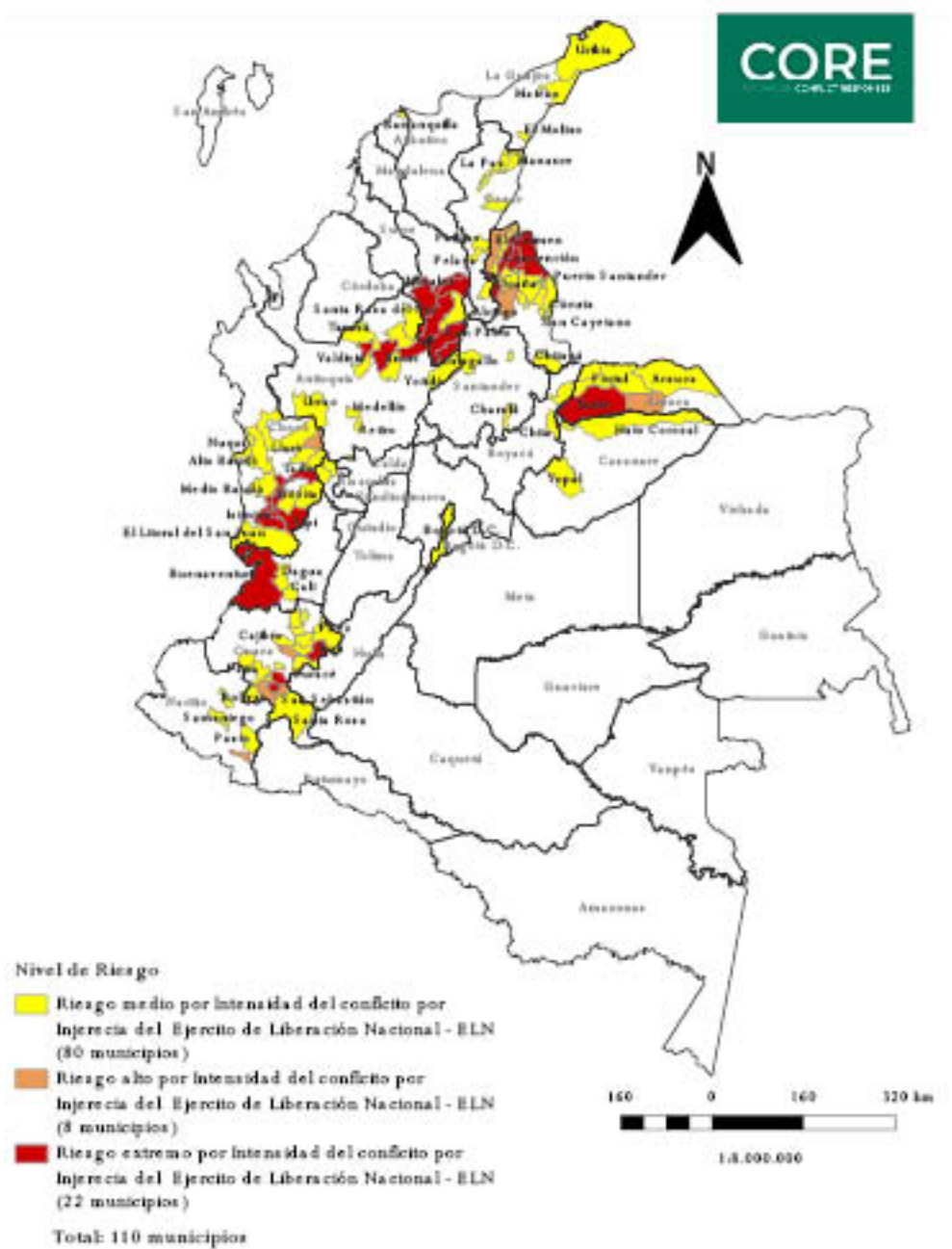
Mapa #34. *Riesgo por la intensidad del conflicto del EGC y las ACSN elecciones 2026*



Mapa #35. Riesgo por injerencia del ELN elecciones 2026



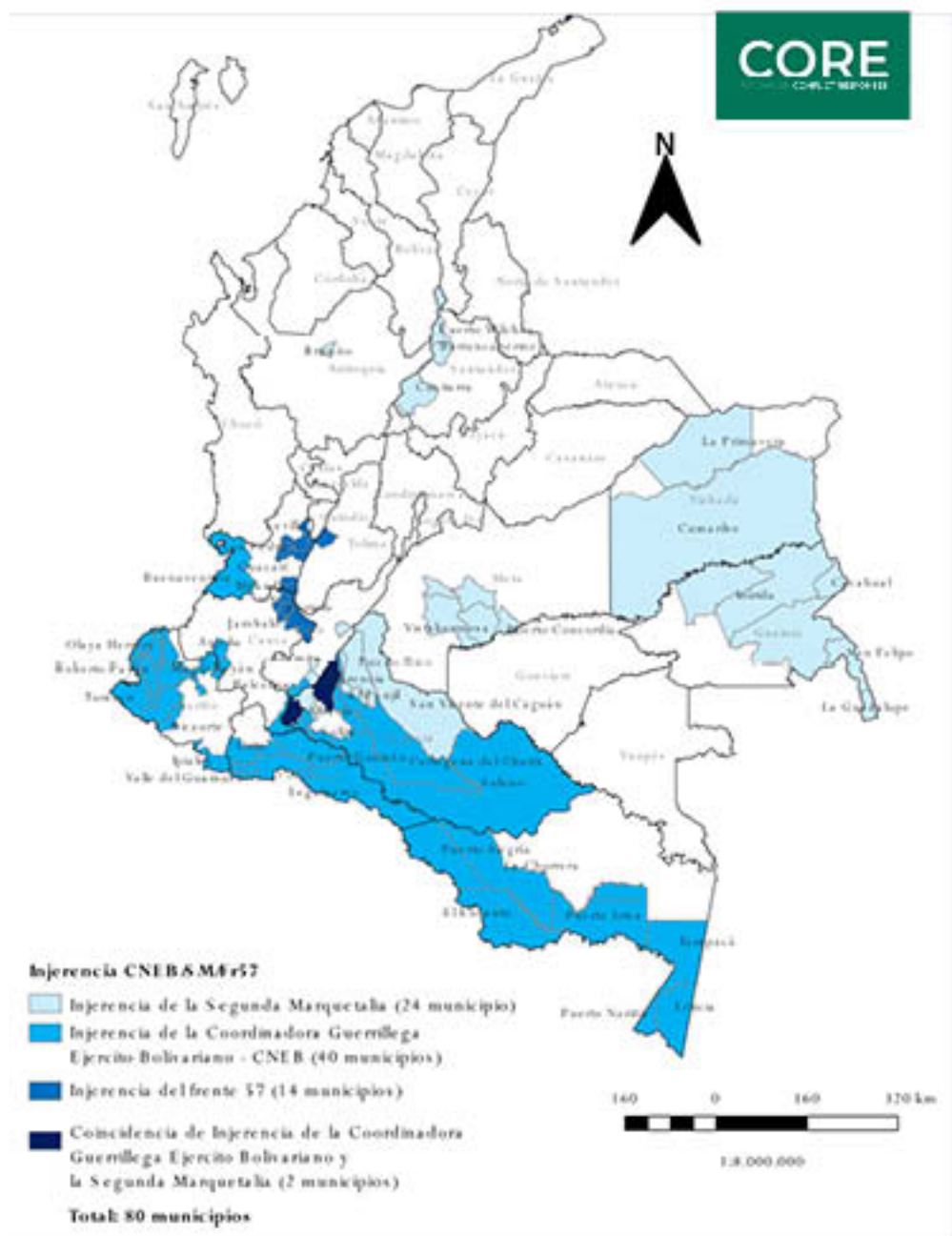
Mapa #36. Riesgo por la intensidad del conflicto del ELN elecciones 2026



Riesgo extremo por intensidad del conflicto por injerencia del Ejército de Liberación Nacional - ELN		Ocasiente	
Antioquia (3)	Bolívar (1)	Valle del Cauca (2)	
Arauca	Boyacá (2)	Cali	
Caquetá	Chico	Dagua	
Cauca (1)	El Esneio	Total	80
Cesar	Gilicia		
Córdoba (6)	Guaviare (3)		
Cundinamarca	Hato Correal		
Guaviare	Sonoma		
La Guajira	Yopal		
Magdalena	Casaca (14)		
Meta	Argelia		
Nariño	Cajalao		
Quindío	Caldero		
Santander	Caloto		
Sucre	Mesodereia		
Tolima	Páez		
Valle del Cauca (1)	Palmira		
	Puerto		
	Santa Rosa		
	Santander de Quindío		
	Silvia		
	Sucre		
	Tenorio		
	Cesar (7)		
	La Jaga de Biorico		
	La Paz		
	Mancora		
	Palmira		
	Palmira		
	Rio de Oro		
	San Diego		
	Chicó (9)		
	Alto Baudo		
	Bugabo		
	El Litoral del San Juan		
	Llano		
	Medio Baudo		
	Morón		
	Niquel		
	Quibdó		
	San José del Palmar		
	La Guajira (3)		
	El Molino		
	Makao		
	Urdin		
	Nariño (3)		
	Cundinamarca		
	Palmira		
	Sonoma		
	Nariño de Santander		
	(12)		
	Bucarama		
	Chirigá		
	Comandante		
	Cicota		
	El Zulia		
	Huairi		
	La Playa		
	Leónides		
	Puerto Santander		
	San Calisto		
	San Capetano		
	Sardisato		
	Villa del Rosario		
	Guasacalla (2)		
	Mitran		
	Pueblo Rico		
	Santander (4)		
	Barrancabermeja		
	Bucaramanga		
	Chirali		

Mapa #37.

Riesgo por injerencia de la CNEB, la SM y el Frente 57 elecciones 2026



**Colindadura de
Injerencia de la
Coordinadora
Guerrillera Ejército
Bolivariano y la
Segunda Marquetalia**

Cajoná (2)

El Encanto
San José del Fuerte

Total 2

Injerencia de la

Segunda (1)

Cajoná (6)

Cabito

Cajoná

Jarabá

Miranda

Pico

Toribio

Tolima (1)

Rosoverde

Valle del Cauca (7)

Florida

Guacá

Guadalupe de Buga

Pradera

San Pedro

Serilla

Talca

Total 20

Injerencia de la

Coordinadora

Guerrillera Ejército

Bolivariano - CIBO

Amacaram (2)

El Encanto

La Chorrera

León

Puerto Alegre

Puerto Arica

Puerto Barrios

Turkey

Cajoná (2)

Alcira

Carapá del Chirí

Carillo

El Puig

La Montaña

Solano

Talca

Cajoná (1)

Agüita

Bello

Puerto

Trilla (2)

Acosta

Palencia

Narillo (12)

Barbacoa

Candela

El Chorro

Cajoná

Francisco Pizarro

Ipiales

La Tola

León

Magü Páez

Mangrove

Olaya Herrera

Rosario

Roberto Payán

Tinaco

Turkey

Turkey (7)

Leguano

Olaya

Puerto Airo

Puerto Calento

Puerto Guadalupe

San Miguel

Valle del Guacá

Valle del Cauca (1)

Injerencia

Total 40

Injerencia de la

Segunda Marquetalia

Arriaga (1)

El Encanto

Cajoná (4)

Trilla de Los Andes

El Encanto

Puerto Río

San Vicente del Caguán

Guadalupe (6)

Barranca Miana

Candela

Trilla

La Guadalupe

Puerto Colombia

San Felipe

Trilla (1)

Alvarado

Campesino

San

Mito (1)

Puerto Colombia

Puerto Liria

Puerto Río

San José de Arce

Varadero

Santander (3)

Barranca Miana

Candela

Puerto Wilches

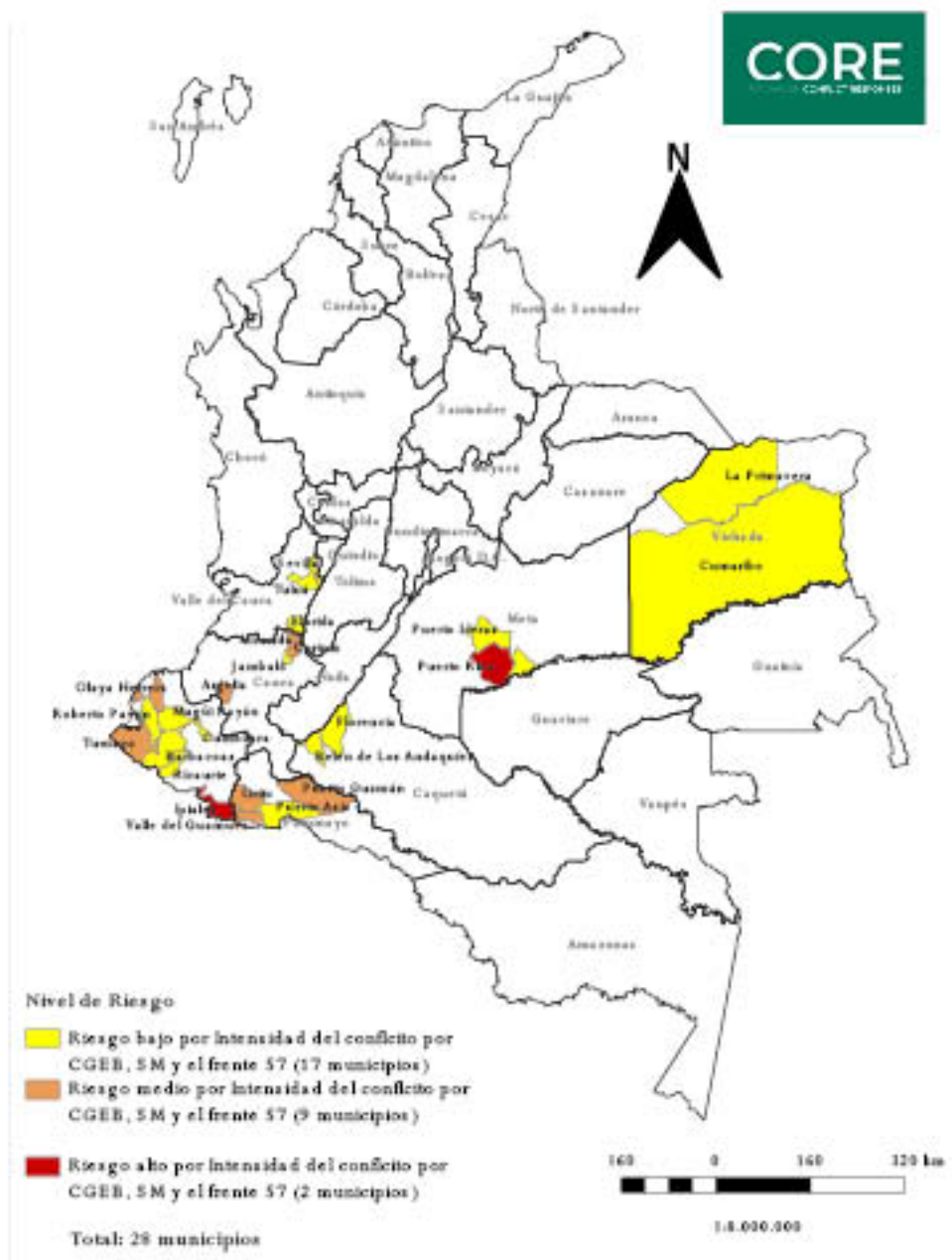
Trilla (2)

Candela

La Primavera

Total 24

Mapa #38. *Riesgo por la intensidad del conflicto de la CNEB, la SM y el Frente 57 elecciones 2026*



Riesgo extremo
por intensidad
del conflicto por
la Coordinadora
Guerrilla Efectiva
Bolívariano, la
Segunda Marquetalia
y el Frente 33

Mota (1)

Puerto Rico

Nariño (1)

Tolima

Total 2

Riesgo alto por
intensidad del
conflicto por la
Coordinadora
Guerrilla Efectiva
Bolívariano, la
Segunda Marquetalia
y el Frente 33

Cauca (4)

Argelia

Cauca

Miraflores

Tolima

Nariño (2)

Olga Herrera

Tamayo

Palmira (3)

Cauca

Puerto Guzmán

Valle del Guzmán

Total 9

Riesgo medio
por intensidad
del conflicto por
la Coordinadora
Guerrilla Efectiva
Bolívariano, la
Segunda Marquetalia
y el Frente 33

Caqueta (2)

Déora de Los Andes

Florencia

Cauca (1)

Jardín

Mota (2)

Puerto Caicedo

Puerto Lleras

Nariño (3)

Barbosa

Candela

Magüé Páez

Rosario

Roberto Páez

Palmira (1)

Puerto Asís

Valle del Cauca (4)

Florida

Pradera

Serella

Talca

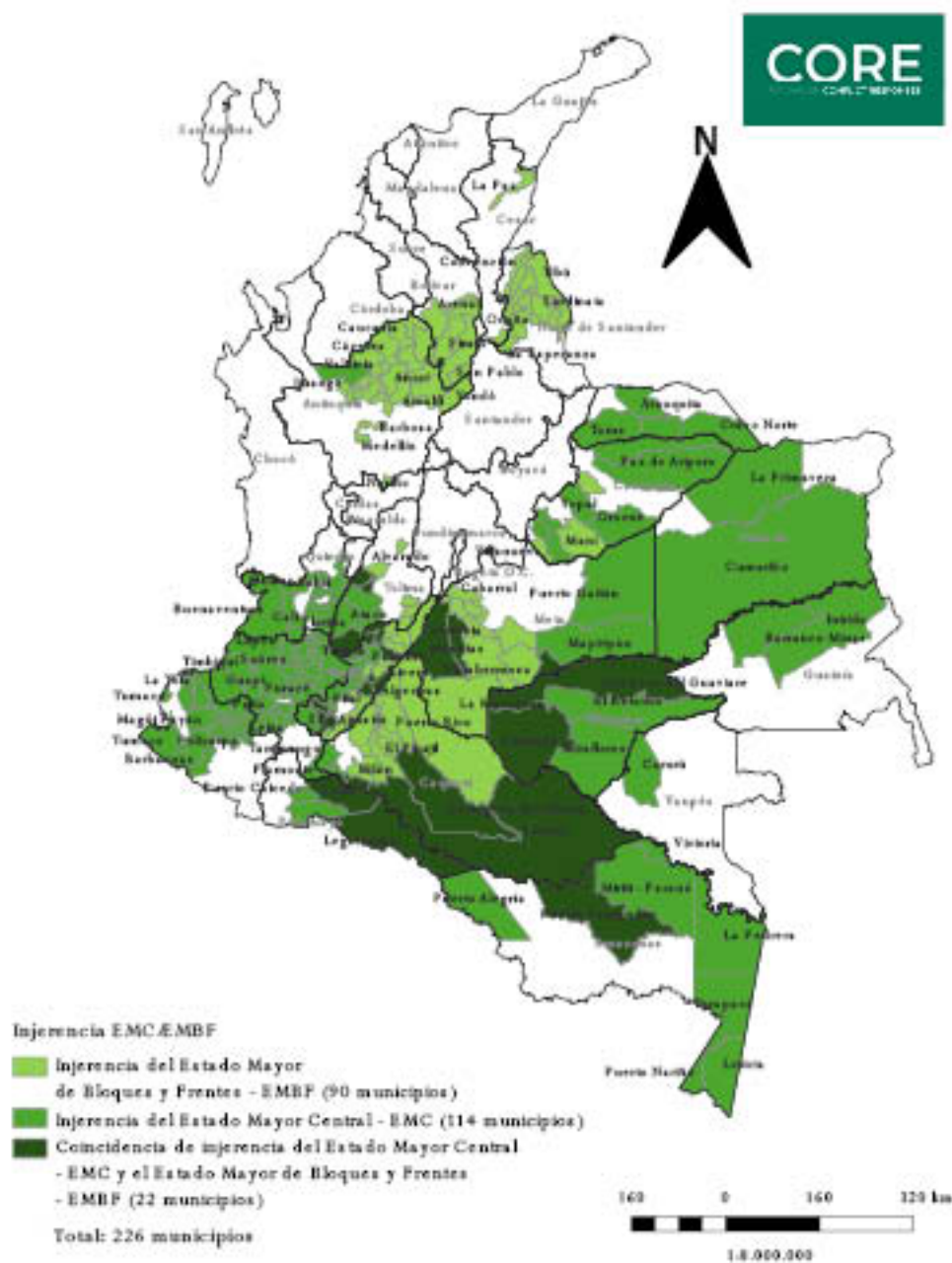
Vichada (2)

Camarillo

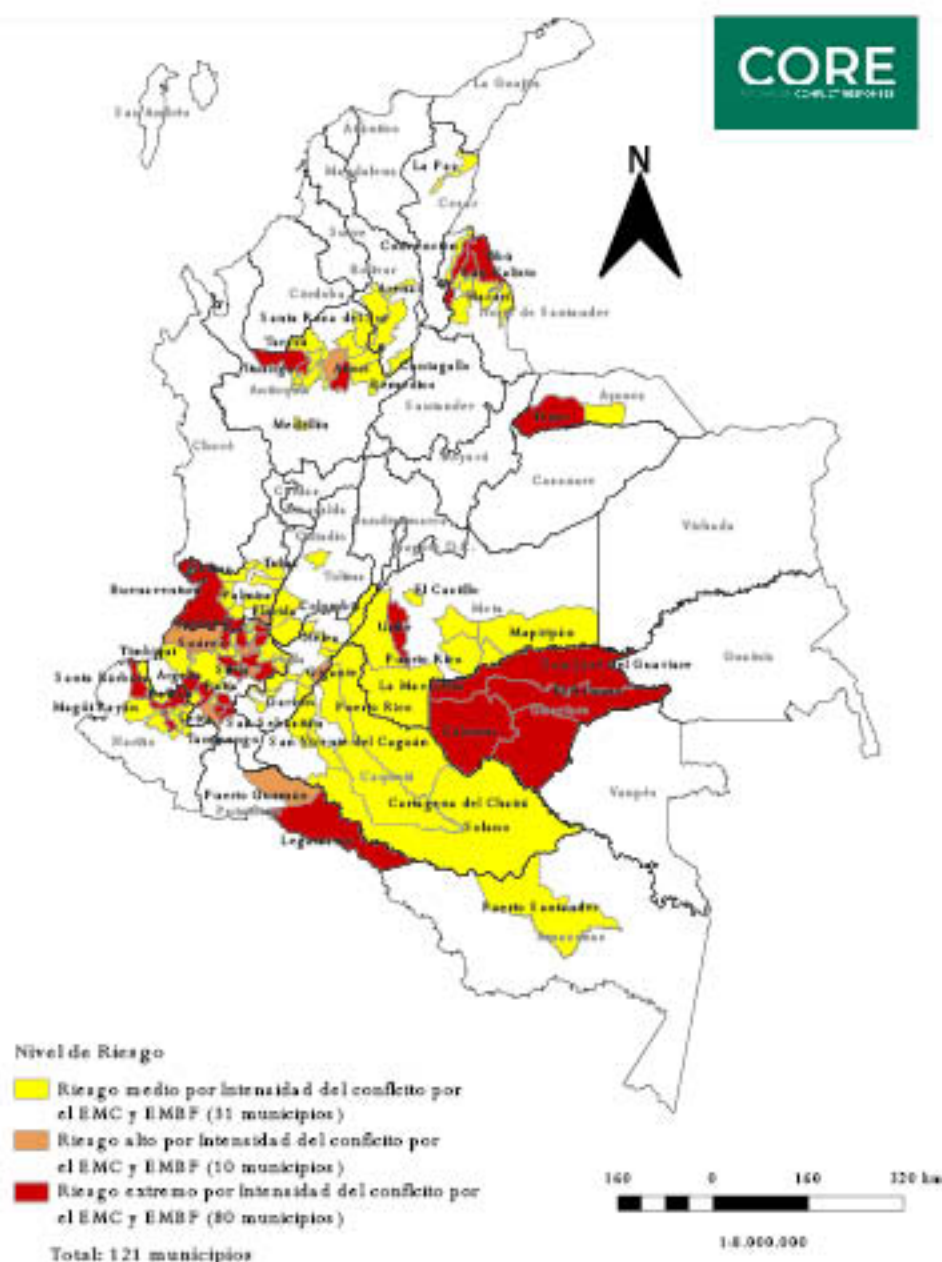
La Primavera

Total 37

Mapa #39. Riesgo por injerencia del EMC y el EMBF elecciones 2026

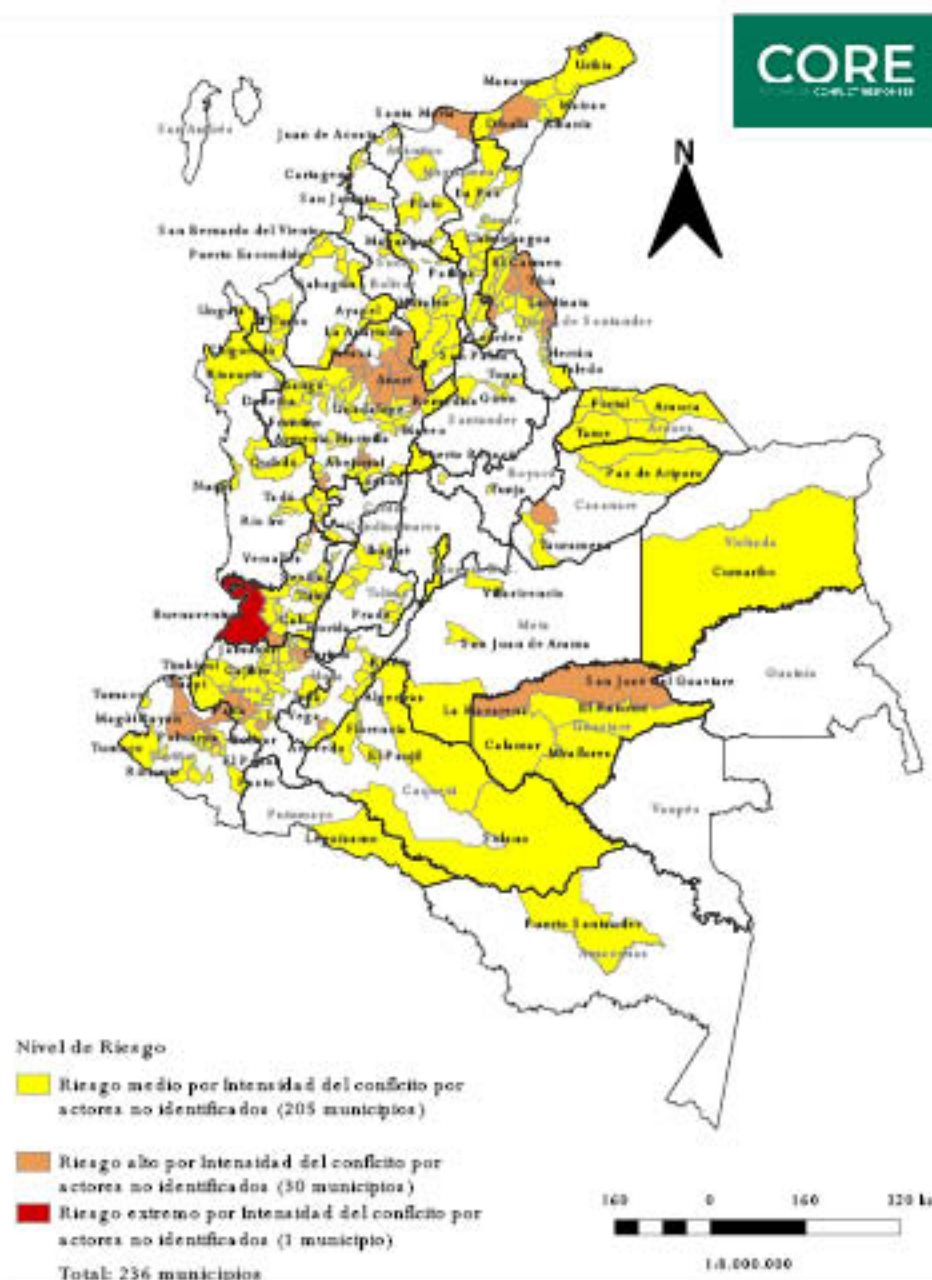


Mapa #40 *Riesgo por la intensidad del conflicto del EMC y el EMBF elecciones 2026*



Riesgo extremo por intensidad del conflicto por el Estado Mayor Central - EMC y el Estado Mayor de Bloques y Frentes - EMBF	Riesgo medio por intensidad del conflicto por el Estado Mayor Central - EMC y el Estado Mayor de Bloques y Frentes - EMBF	Puerto Lleras
Antioquia (3)	Araucanía (1)	Puerto Rico
Asufo	Puerto Santander	Uribe
Brisas	Antioquia (13)	Nariño (7)
Itango	Campanero	El Rosario
Arasca (1)	El Buge	Leiza
Toro	Guadalupe	Los Andes
Cauca (13)	Medellín	Magüé Payán
Almaguer	Rosario	Palmira
Argelia	San Andrés de Cuerpo	Santa Fe de
Cajón	San José de la Montaña	Teófilo
Corinto	Sogotá	Norte de Santander (6)
Itatí	Turkey	Alonso
La Vega	Tolima	Comandante
Papa	Valencia	Ciudad
Popayán	Turkey	Macar
San Sebastián	Zaragoza	Sacramento
Santander de Quilichao	Araucanía (1)	Santana (1)
Sibola	Puerto Rosillo	Valle del Cauca (8)
Solano	Bolívar (4)	Cali
Turkey	Asufo	Cajón
Guararé (6)	Castellón	Dagua
Calamar	Montecristo	Guadalupe de Buga
El Rosario	Santa Rosa del Sur	Palmira
Miraflores	Cajón (6)	Pradera
San José del Guararé	Cartagena del Chirí	Riochí
Mota (1)	Florencia	Tela
Mosquera	La Montaña	Total 80
Nariño (7)	Puerto Rico	
Candelaria	San Vicente del Caguán	
El Chorro	Solano	
Norte de Santander (6)	Cauca (13)	
El Toro	Bolívar	
Ocaña	Buenos Aires	
Trometa	Cajón	
Tibá	El Turco	
Palmira (1)	Guadalupe	
Leguizam	Mosquera	
Valle del Cauca (2)	Padilla	
Dumenseca	Papa	
Jaramá	Piedras	
Total 30	Rosario	
Riesgo alto por intensidad del conflicto por el Estado Mayor Central - EMC y el Estado Mayor de Bloques y Frentes - EMBF	Saco	
Antioquia (1)	Tandil	
Asufo	Villa Rica	
Cauca (6)	Cesar (1)	
Bolívar	La Paz	
Cajón	Bolívar (10)	
Juchitán	Colombia	
López	Guadalupe	
Miraflores	Gigante	
Toro	Itatí	
Huila (1)	La Argentina	
Alajuela	La Plata	
Palmira (1)	Nápoles	
Puerto Guzmán	Niño	
Valle del Cauca (1)	Palmira	
Florida	Rosario	
Total 30	Rosario (7)	
	El Castillo	
	La Macarena	
	Magüé Payán	
	Puerto Guzmán	

Mapa #41 *Riesgo por la intensidad del conflicto por actores no identificados elecciones 2026*



[illegible]